



## **Análisis Común de País del Sistema de las Naciones Unidas**

*Febrero, 2017*



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	8
1. La nueva agenda de desarrollo en el Estado Plurinacional de Bolivia .....	9
1.1 El Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso de cambio .....	10
1.1.1 Situación política .....	10
1.1.2 Economía .....	11
1.2 Las dinámicas sociales y demográficas de Bolivia .....	11
1.2.1 Pueblos indígenas .....	12
1.2.2 Situación de las mujeres e igualdad de género .....	12
2. Capítulos del Análisis Común de País .....	13
2.1 Personas .....	13
2.1.1. Erradicación de la pobreza .....	13
2.1.2. Universalización de servicios .....	15
Agua y saneamiento .....	15
Salud .....	15
Nutrición .....	18
Educación .....	19
2.2 Armonía .....	22
2.2.1 Derechos humanos .....	22
2.2.2 Racismo y discriminación .....	23
2.2.3 Naturalización de la violencia como práctica sociocultural .....	23
2.2.4 Seguridad ciudadana .....	25
2.2.5 Narcotráfico .....	25
2.2.6 Justicia .....	26
2.2.7 Participación democrática y gestión pública .....	27
2.3 Prosperidad .....	30
2.3.1 Producción industrial .....	30
2.3.2 Migración .....	31
2.3.3 Pleno empleo y trabajo decente .....	32
2.3.4 Desarrollo rural .....	34
2.3.5 Seguridad y soberanía alimentaria .....	35
2.3.6 Investigación, formación especializada y desarrollo tecnológico sostenible e innovador .....	36



2.3.7 Planificación participativa para la implementación de las políticas públicas .....	36
2.4 Madre Tierra.....	38
2.4.1 Cambio climático y cuidado de la Madre Tierra.....	38
2.4.2 Pérdida de biodiversidad.....	40
2.4.3 Asentamientos humanos .....	41
2.4.4 Gestión de residuos sólidos, domésticos e industriales.....	41
2.4.5 Matriz energética a futuro .....	42
2.5 Alianzas.....	44
2.5.1 Alianzas múltiples para lograr resultados para los más vulnerables .....	44
2.5.2 Cooperación internacional para la implementación de la Agenda Patriótica y el PDES .....	45
2.5.3 Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular .....	45
2.5.4 Alianzas estratégicas con la sociedad civil y el sector privado.....	45
3. Ventajas comparativas del Sistema de Naciones Unidas en el país.....	47



## ACRÓNIMOS

ABT	Autoridad de Bosques y Tierra
ACE	Alimentación Complementaria Escolar
ACOBOL	Asociación de Concejales de Bolivia
AIOC	Autonomías Indígenas Originario Campesinas
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA – TCP	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCA	Common Country Assessment – Análisis Común de País.
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CELAC	Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños
CEMLA	Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CESCR	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CGO	Comisión Gubernamental del Ozono
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CNMCIQB	Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia
CONALTID	Consejo Nacional de Luchas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
CONAN	Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
COP	Contaminantes Orgánicos Persistentes
CPE	Constitución Política del Estado
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
ENDSA	Encuesta Nacional de Demografía y Salud
EPU	Examen Periódico Universal



ESNUT	Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición
ETA	Entidades Territoriales Autónomas
FAO	Food and Agriculture Organization – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FELCN	Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
GdRD	Gestión de Riesgos y Desastres
GruS	Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia
IDH	Informe de Desarrollo Humano
INB	Ingreso Nacional Bruto
INE	Instituto Nacional de Estadística
INIAF	Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
IOC	Indígena Originario Campesino
ITS	Infecciones de Transmisión Sexual
LGTBI	Lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual
MAS	Movimiento al Socialismo
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MNOAL	Movimiento de Países No Alineados
MPD	Ministerio de Planificación del Desarrollo
MTILCC	Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción
MyPE	Medianas y pequeñas empresas
NNA	Niños, niñas y adolescentes
NNASC	Niños, niñas y adolescentes en situación de calle
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA	Organización de los Estados Americanos



OEAS	Organizaciones Económicas Campesinas Indígena Originarias
OECOM	Organizaciones Económicas Comunitarias
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPS/CDC	Organización Panamericana de Salud/Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
OPS/OMS	Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud
PyME	Pequeñas y medianas empresas
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PAN	Política de Alimentación y Nutrición
PDES	Plan de Desarrollo Económico y Social
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PIB	Producto Interno Bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNCC	Programa Nacional de Cambio Climático
POA	Plan Operativo Anual
PSDI	Planes Sectoriales de Desarrollo Integral
PTDI	Planes de Desarrollo Territorial Integral
PMA	Programa Mundial de Alimentos
SAICM	Strategic Approach to International Chemicals Management - Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional
SAO	Sustancias Agotadoras de Ozono
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIPLUS	Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos
SNU	Sistema de Naciones Unidas
SPIE	Sistema de Planificación Integral del Estado
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
VMEEA	Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas



VIO	Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
VIPFE	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
UDAPE	Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
UNASUR	Unión de Naciones Suramericana
UNCT	United Nations Country Team – Equipo País de Naciones Unidas
UNDAF	United Nations Development Assistance Framework – Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Bolivia adopta el nombre de Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia
UNFPA	United Nations Population Fund – Fondo de Población de las Naciones Unidas



## INTRODUCCIÓN

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU), como parte del proceso de elaboración del Marco de Complementariedad de las Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia (UNDAF, por sus siglas en inglés), para el periodo 2018-2022, desarrolla un Análisis Común de País (CCA, por sus siglas en inglés) con la finalidad de contar con un diagnóstico que permita tener una aproximación a la situación social, política, ambiental y económica de Bolivia, identificando las principales brechas, las causas y áreas de prioridad para promover el desarrollo sostenible.

El Análisis Común de País se constituye en un instrumento técnico que toma como referencia las fuentes de información y análisis verificables del país, poniendo especial énfasis en áreas en que el apoyo del SNU pueda contribuir a alcanzar los desafíos planteados en la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, que se constituyen en elementos claves en el proceso de elaboración del UNDAF 2018-2022. Con el propósito de lograr un análisis de calidad, se estableció como parte del proceso, la revisión y análisis de información disponible del Estado Plurinacional de Bolivia y el SNU, a nivel nacional y regional; a su vez, se revisó información generada por mecanismos internacionales. Por otro lado, se organizaron espacios de consulta intersectoriales e interinstitucionales contando con una amplia participación de actores públicos y privados del nivel nacional, departamental y municipal, así como de la cooperación internacional, el sector privado, partidos políticos, academia, organizaciones de mujeres, movimientos sociales y sociedad civil. A fin de contar con información adicional sobre grupos en situación de vulnerabilidad<sup>1</sup>, se llevó a cabo un proceso de consulta con representantes de organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, jóvenes, personas adultas mayores, población lesbiana, gay, transexual, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI<sup>2</sup>) y personas privadas de libertad, entre otras.

El presente CCA está estructurado en tres secciones:

1. La primera sección describe el contexto macro del país destacando las prioridades nacionales de desarrollo, el proceso de cambio impulsado por el Gobierno, la economía, así como las dinámicas sociales y demográficas de Bolivia.
2. La segunda sección contiene datos y análisis de los temas priorizados, la revisión de los principales avances y desafíos frente a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Patriótica 2025. Dado el carácter integrado e indivisible de los ODS y sus respectivas metas, con fines solo metodológicos, esta sección se ha organizado en cinco esferas: (i) Personas, (ii) Armonía (Paz), (iii) Prosperidad, (iv) Madre Tierra (Planeta) y (v) Alianzas<sup>3</sup>. Cada una de ellas forma parte de un capítulo que analiza un número específico de ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025, según lo establecido en el documento de alineamiento “ODS para Vivir Bien”.
3. La tercera sección establece el análisis de las ventajas comparativas a partir de la identificación de las fortalezas individuales y colectivas que tiene el SNU para promover el desarrollo de Bolivia tomando en cuenta tres dimensiones: *el mandato de actuar, la capacidad de actuar y el mejor posicionamiento respecto a otros actores de la cooperación*.

<sup>1</sup> En línea con el concepto de “no dejar a nadie atrás”.

<sup>2</sup> Si bien esta afirmación hace referencia explícita a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales, también están incluidas otras personas que se enfrentan a la violencia y la discriminación sobre la base de sus características reales o percibidas de orientación sexual, identidad de género y características sexuales o las que se identifiquen con otros términos.

<sup>3</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.





## 1. La nueva agenda de desarrollo en el Estado Plurinacional de Bolivia

En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la agenda para el desarrollo “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad con el objeto de fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad<sup>4</sup>. Las máximas autoridades de los Estados y altos representantes de gobiernos, entre ellos del Estado Plurinacional de Bolivia, se comprometieron a lograr un desarrollo sostenible en las dimensiones social, económica y ambiental, de forma equilibrada e integral. Para ese fin, se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas, de carácter integral e indivisible, que exponen una visión de futuro ambiciosa y transformadora, inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como en los derechos y obligaciones de los Estados en el marco del derecho internacional. Si bien los ODS expresan las aspiraciones de la comunidad internacional, la Agenda 2030 establece que cada Estado debe fijar sus propias metas nacionales de acuerdo con las circunstancias y realidad de cada país, incorporando las aspiraciones y metas globales en los procesos de planificación de políticas públicas y estrategias nacionales.

El Vivir Bien es comprendido como “una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y con los demás, el estar bien individual, así como el estar bien colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza”<sup>5</sup>. Asimismo, la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 8, Parágrafo I, dispone que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: *ama qhilla, ama llulla, ama suwa* (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), *suma qamaña* (vivir bien), *ñandereko* (vida armoniosa), *teko kavi* (vida buena), *ivi maraei* (tierra sin mal) y *qhapaj ñan* (camino o vida noble)”<sup>6</sup>.

A fin de alcanzar el Vivir Bien, el Estado Plurinacional de Bolivia establece la Agenda Patriótica 2025 como un instrumento que refleja la realidad boliviana actual y proyecta al país para el año 2025, a través de 13 pilares y 68 dimensiones, que son de responsabilidad compartida entre todos los niveles e instancias del Estado. Adicionalmente, se cuenta con el PDES 2016-2020, que establece el marco estratégico y la priorización de metas, resultados y acciones para el logro de este fin a mediano plazo. Tanto la Agenda Patriótica 2025 y el PDES 2016-2020 están orientados a consolidar y profundizar los logros alcanzados desde la aprobación de la nueva CPE con un enfoque centrado en la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades. La pobreza se conceptualiza en tres dimensiones: i. la pobreza material, que se manifiesta en la ausencia de acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida; ii. la pobreza social, que se visibiliza en la predominancia del individualismo sobre los valores comunitarios; y iii. la pobreza espiritual, que se expresa en la presencia de prácticas de consumismo, discriminación y racismo<sup>7</sup>. La pobreza es un eje central que se articula con el resto de los pilares de la Agenda Patriótica y que representa oportunidades de cooperación para el SNU de contribuir en la reducción de la pobreza en sus diferentes formas. Tanto la Agenda Patriótica 2025 como la Agenda 2030 se retroalimentan y representan un nuevo horizonte y un reto para el desarrollo sostenible en Bolivia.

<sup>4</sup> Ídem.

<sup>5</sup> Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 en el Marco de Desarrollo Integral para Vivir Bien. Bolivia. Aprobado mediante Ley 786, del 9 de marzo de 2016.

<sup>6</sup> Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 2009.

<sup>7</sup> PDES 2016-2020.



## 1.1 El Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso de cambio

Bolivia se encuentra en un periodo de consolidación del Estado Plurinacional, a partir de la nueva CPE de 2009. El proceso de transformación de la República de Bolivia al Estado Plurinacional tiene dos características fundamentales: la adopción de un nuevo tipo de democracia intercultural que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas -a través de la inclusión, la representación política y el reconocimiento social- y la naturaleza autónoma y descentralizada del Estado. El Estado Plurinacional está dividido en cuatro órganos -Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral- y a diferencia de la República de Bolivia contempla cinco niveles de gobierno: el nivel nacional, el autónomo departamental, el autónomo regional, el autónomo indígena originario campesino y el municipal.<sup>8</sup> A partir de la adopción de la CPE, en 2009, el ejercicio de la función pública y la coordinación entre estos niveles están aún en construcción. A 10 años de importantes cambios políticos y a siete de la aprobación de la Constitución, los desafíos más importantes implican la consolidación de un Estado Plurinacional que desarrolle una visión colectiva, complementaria y solidaria, en la que se integren las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, jurídicas, ecológicas y las afectivas. Esta construcción de Estado se basa en los fundamentos del Vivir Bien, la vida en complementariedad, armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad, eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación<sup>9</sup>.

### 1.1.1 Situación política

Bolivia ha consolidado en estos años un entorno políticamente estable que le permite avanzar en una gradual transformación de sus estructuras estatales en base a los lineamientos constitucionales vigentes. El núcleo de la transformación de estas estructuras se encuentra en un proceso de cambio que tiene como ejes conductores priorizados la descolonización y la despatriarcalización del Estado, plasmados en normativas de protección y fortalecimiento de mayorías históricamente ignoradas en los espacios de toma de decisión y como sujetos de derechos, además del establecimiento de mecanismos que han posibilitado un alto grado de participación social.

Entre 2014 y 2015, se han elegido autoridades ejecutivas y legislativas de cuatro niveles de gobierno en comicios democráticos, pacíficos y con gran participación. En esos procesos se ha ratificado la confianza al gobierno del Presidente Evo Morales, que ha sido reelecto con el 61% de votos. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha obtenido mayorías cómodas en las dos cámaras del Órgano Legislativo y ha logrado victorias en la mayoría de gobiernos departamentales y municipales. Pero también la oposición ha ganado elecciones en varias ciudades y departamentos. El voto ha configurado un escenario de pluralidad política. Existen, sin embargo, retos en el fortalecimiento de una institucionalidad estatal efectiva, abierta al control social y a la transparencia.

Hay avances sustanciales en la puesta en funcionamiento de las autonomías indígenas, la garantía de una paridad de género en la representación política en el espacio legislativo nacional, el acceso a un sistema de identificación ciudadana eficiente y en el involucramiento de las organizaciones sociales en las decisiones del Gobierno. Se está trabajando en una profunda revolución en el funcionamiento del sistema de justicia y en la mejora de las condiciones de seguridad de la ciudadanía, aspectos estructurales en los que aún persisten rezagos. Se reconoce que se han producido avances legislativos en la protección de los derechos humanos y se tiene el gran reto de garantizar la implementación de estas normas, para lo cual se debe comprometer recursos y

<sup>8</sup> CPE (2009).

<sup>9</sup> PDES 2016-2020.



fortalecer las capacidades institucionales de las entidades que deben asegurar su cumplimiento, en el marco de la progresividad de los derechos humanos.

### 1.1.2 Economía

Durante la última década, Bolivia atravesó por importantes cambios económicos, políticos y sociales. En materia económica, entre 2006 y 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano creció a una tasa de 5,04% en promedio, llegando a 4,85% en 2015, en un contexto internacional favorable y debido a un prudente manejo macroeconómico. Esta tasa es la más alta registrada desde el retorno a la democracia en el país en los años ochenta. En 2014, el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzó a 3.012 dólares, ubicando a Bolivia como país de ingresos medios bajos. Entre 2006 y 2015, las reservas nacionales, las importaciones y las exportaciones subieron notablemente, manteniendo a la vez niveles sostenibles de deuda pública.

Si bien las predicciones de crecimiento económico para los próximos años prevén que Bolivia será una de las economías que más crecerá en América Latina, impulsada por una demanda interna sólida y una fuerte inversión pública, los desafíos para garantizar la sostenibilidad de este crecimiento no son menores considerando el actual entorno de mayores restricciones externas, al igual que el reto de diversificar la economía. Sobre este último aspecto, el PDES 2016-2020 refleja los esfuerzos hacia la consolidación de una matriz productiva bajo el nuevo modelo de economía plural. Esta situación plantea también nuevos desafíos en materia de sostenibilidad del progreso social alcanzado, pues solo en la medida en que el crecimiento de la economía mantenga el ritmo de los años pasados, no se pondrá en riesgo el espacio fiscal que hizo posible la expansión del gasto público social y la inversión pública en los últimos años<sup>10</sup>.

## 1.2 Las dinámicas sociales y demográficas de Bolivia

Según los resultados del Censo de 2012, Bolivia cuenta con una población de 10.059.856 habitantes, de los cuales el 49.9% son hombres y el 50.1% mujeres. Del total de habitantes, 3.8 millones son niñas, niños y adolescentes (NNA), que representan el 38% de la población, evidenciando que Bolivia sigue siendo uno de los países más jóvenes de América Latina. El bono demográfico es un fenómeno asociado a la transición demográfica y en la cual se encuentra Bolivia. Durante esta transición se observa un periodo limitado de años en el que la proporción de personas en edad de trabajar (potencialmente activas), de 15 a 59 años, es mayor al número de personas potencialmente dependientes -de 0 a 14 años y de 61 y más años-, lo que se conoce como acervo demográfico. Este periodo ofrece posibilidades de incrementar las tasas de crecimiento económico per cápita y aumentar los niveles de bienestar de la población. Algunas estimaciones señalan que el acervo demográfico se extenderá hasta décadas futuras<sup>11</sup>.

Bolivia está viviendo una notable transformación en las dinámicas sociales y demográficas con una población más urbanizada, importantes flujos de migración interna y externa, y una mayor proporción de jóvenes en todos los espacios sociales. Hoy, el 67,5% de la población vive en el área urbana y el 32,5% en el área rural. Estos cambios plantean retos concretos y a la vez ofrecen oportunidades y ventajas de transformación social y desarrollo. Sin embargo, esto no debe poner en segundo plano las prioridades que el país aún tiene en materia de mejoras para las poblaciones

<sup>10</sup> Paz Arauco, Verónica. (2014). *Nuevos caminos de la política social en Bolivia: el rol de las transferencias en efectivo (2006-2012)*.

<sup>11</sup> Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2007). *Estimaciones y proyecciones de la Población 2007*.



rurales, indígenas y en situación de vulnerabilidad que no están migrando, como las personas adultas mayores y mujeres.<sup>12</sup>

### *1.2.1 Pueblos indígenas*

Una gran parte de la población en Bolivia es indígena<sup>13</sup>. El 41% de la población se autoidentifica con alguna de las 36 naciones indígenas, cada una con su propia cultura e idioma. Estas naciones están distribuidas en los nueve departamentos de Bolivia, tanto en áreas rurales como en centros urbanos y cuyas lenguas, manifestaciones culturales y derechos están reconocidos y garantizados en la CPE e instrumentos internacionales. A pesar de los significativos avances en la última década, las problemáticas más importantes están relacionadas con el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la identidad propia e integridad cultural, los derechos referidos a la tierra, territorio y al uso y disfrute de recursos naturales, la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y las instituciones indígenas, la falta de acceso a una educación y salud culturalmente adecuadas, el acceso y fortalecimiento de la estructura institucional de justicia propia, el derecho a la consulta libre e informada y el derecho a la reparación y compensación.

### *1.2.2 Situación de las mujeres e igualdad de género*

La CPE sustenta valores de igualdad, inclusión, complementariedad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. Incorpora la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y prohíbe toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, embarazo, entre otros. La Agenda Patriótica y el PDES conceptualizan la pobreza como una pobreza material pero también como una pobreza de carácter social y espiritual y en este marco el machismo es considerado como una forma de pobreza espiritual que debe ser superada.

Para garantizar la igualdad de género, son aspectos de principal preocupación: la alta prevalencia de distintas formas de violencia y feminicidio, las persistentes altas tasas de mortalidad materna, el incremento del número de embarazos en niñas y adolescentes, la inserción laboral y las condiciones laborales desventajosas para las mujeres y la constante segregación de las mujeres en los mercados laborales, la falta de datos e información sobre la economía del cuidado y carga doméstica que recae de manera diferenciada en hombres y mujeres, y la falta de permanencia de las mujeres en cargos políticos departamentales y municipales. Si bien la Ley N° 26 de Régimen Electoral promueve la paridad de género en las distintas instancias del Estado, el machismo estructural aún bloquea algunos de estos espacios. Estos y otros temas relativos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se desarrollan y amplían en los distintos acápite de este documento.

<sup>12</sup> Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia: El nuevo rostro de Bolivia. Transformación social y metropolización.*

<sup>13</sup> Este dato hace referencia a la autoadscripción a un pueblo o nación indígena originario campesina y/o afroboliviano y contempla a aquellas y aquellos que en el Censo 2012 se identificaron como indígenas.

## 2. Capítulos del Análisis Común de País

Esta sección contiene datos y análisis de los temas priorizados, además de la revisión de los principales avances y desafíos de la Agenda 2030, los ODS y la Agenda Patriótica 2025. Dado el carácter integral e indivisible de los ODS y sus respectivas metas, con fines solo metodológicos, la organización de esta primera sección se ha desarrollado tomando como referencia las siguientes esferas: (i) Personas, (ii) Armonía (Paz), (iii) Prosperidad, (iv) Madre Tierra (Planeta) y (v) Alianzas. Cada una de ellas forma parte de un capítulo que analiza un número específico de ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025, según lo establecido en el documento de alineamiento anexo “ODS para Vivir Bien”.

### 2.1 Personas

El abordaje de la esfera Personas se basa en la meta planteada en la Agenda 2030 referida a “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”<sup>14</sup>. Esta esfera engloba la conjunción entre los siguientes ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025:



**ODS 1:** Fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

**ODS 2:** Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

**ODS 3:** Vida sana y bienestar de todos y a todas las edades.

**ODS 4:** Educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

**ODS 6:** Disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.

**Pilar 1:** Erradicación de la pobreza extrema.

**Pilar 2:** Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien.

**Pilar 3:** Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.

**Pilar 8:** Soberanía alimentaria a través de la construcción del “saber alimentarse para Vivir Bien”.

En este marco, la presente sección aborda los siguientes temas: la erradicación de la pobreza y la universalización de los servicios sociales básicos (agua y saneamiento, salud, nutrición y educación).

#### 2.1.1. Erradicación de la pobreza

Como se expresó en párrafos anteriores, en Bolivia la pobreza se concibe en tres dimensiones: material, social y espiritual. Esta sección describe los indicadores relacionados a la pobreza material. En materia social, la transformación del país se refleja en la reducción de las tasas de pobreza moderada y pobreza extrema, al mismo tiempo que se redujo la desigualdad de ingresos. Entre 2006 y 2015, la pobreza extrema<sup>15</sup> se redujo en más de 20 puntos porcentuales (de 38% a 16,8%), mientras la pobreza moderada se redujo en poco más de 21%, lo que implicó una disminución en

<sup>14</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

<sup>15</sup> Medida a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).



términos absolutos de aproximadamente 1,4 millones de pobres a nivel nacional. Según el PNUD<sup>16</sup>, Bolivia logró la mayor reducción de la pobreza en toda la región y ocupó, según el Banco Mundial<sup>17</sup>, el primer lugar en materia de prosperidad compartida, porque el crecimiento del ingreso del 40% más pobre de la población superó el crecimiento alcanzado del promedio total de la población. Entre 2006 y 2012, la distancia entre el ingreso del 10% más rico y el ingreso del 10% más pobre de la población se redujo a más de la mitad, pasando de 92 a 43 veces sobre el ingreso.

La disminución de la pobreza y la pobreza extrema puede explicarse por el aumento de los ingresos laborales de la mayoría de la población trabajadora boliviana (más del 40% en términos reales entre 2002 y 2013)<sup>18</sup>. Esto depende de dos componentes: el primero, cíclico o coyuntural de los precios internacionales altos y, el segundo, el crecimiento de la producción de largo plazo<sup>19</sup>. La reducción de la pobreza en Bolivia también depende de los cambios demográficos, que han aumentado la proporción de la población en edad laboral<sup>20</sup>. Otro elemento a considerar son las remesas de la población boliviana en el exterior, que se abordará en el capítulo sobre Prosperidad. La disminución de la pobreza también tiene relación con factores de política pública social, asociados al impacto de las transferencias condicionadas y no condicionadas a los hogares como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy<sup>21</sup>. En 2014, el 41% de la población boliviana se benefició con alguno de estos bonos<sup>22</sup>. Por otro lado, las personas con discapacidad también fueron beneficiadas con un bono social anual, acceso a educación, salud y al mercado laboral en instituciones públicas. En 2014 fueron atendidas 53.147 personas con discapacidad en rehabilitación<sup>23</sup>; adicionalmente, las personas con discapacidad visual cuentan con el Bono Anual de Indigencia<sup>24</sup>.

Hay dos constataciones que hay que considerar para diseñar las acciones que garanticen la sostenibilidad de estos logros sociales. La primera tiene que ver con la ralentización del ritmo de reducción de la pobreza y la desigualdad<sup>25</sup>. Esta tendencia sugiere que logros mayores en los próximos años requerirán de políticas renovadas para enfrentar las nuevas realidades y necesidades sociales del país. La segunda está relacionada con la nueva estructura social emergente del proceso de transformación boliviano. Como resultado de la persistente reducción de la pobreza, para el 2013, el estrato medio de ingresos llegó a superar el 55% de la población total y Bolivia dejó de ser un país predominantemente pobre. La salida de la pobreza y la consecuente ampliación del estrato medio traen consigo nuevos y complejos desafíos, entre ellos: la ampliación del estrato medio vulnerable cuya situación en materia de ingresos supera la línea de pobreza moderada pero cuyos ingresos aún enfrentan alta vulnerabilidad de caer por debajo de la misma ante cualquier *shock* adverso. Frente a esta nueva estructura social, las políticas de los próximos años ya no sólo deberán atender necesidades de la población pobre, sino también de los estratos vulnerables cuyas

<sup>16</sup> PNUD (2014). *Perfil de los estratos sociales en América Latina. Pobres, vulnerables y clases medias*. Disponible en: <http://www.revistahumanum.org/blog/wp-content/uploads/2014/08/Perfil-estratos-sociales-America-latina.pdf>.

<sup>17</sup> World Bank Group (2014). *A measured approach to ending poverty and boosting shared prosperity. Concepts, Data and twin Goals*.

<sup>18</sup> La tabla 3.2 del Anexo 1 presenta datos históricos del salario mínimo.

<sup>19</sup> Muriel, Beatriz (2015). *Contexto macroeconómico e ingresos laborales*. En Revista Umbral 27 y 28. CIDES-UMSA. La Paz.

<sup>20</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>21</sup> En la tabla 1.1 del Anexo 1 se presenta un resumen de los indicadores de pobreza. La tabla 1.2 presenta algunos indicadores relacionados con el impacto del Bono Juana Azurduy.

<sup>22</sup> PDES 2016-2020.

<sup>23</sup> Ídem.

<sup>24</sup> Defensoría del Pueblo (2011). *Estado de situación de las mujeres con discapacidad. Recomendaciones Defensoriales*. Los datos pueden variar dependiendo de nuevas afiliaciones.

<sup>25</sup> Paz Arauco, Verónica (2015). *Erradicar la pobreza extrema al 2025. El desafío de los dos millones*.





condiciones sociales (escolaridad, acceso a servicios de salud, empleo) aún no alcanzan las logradas por los estratos medios<sup>26</sup>.

Por último, sigue siendo importante atender una agenda pendiente de disparidades, que resulta de la confluencia de desigualdades de larga data que persistieron a lo largo de la construcción del Estado y la sociedad boliviana, y de un proceso de transformación social y económica que aún no llega a toda la población por igual. En medio de los logros alcanzados en materia económica y social en la última década, Bolivia aún enfrenta importantes desafíos para alcanzar un desarrollo humano para toda la población boliviana. La persistencia de desigualdades urbano-rurales, de género, condición indígena y entre departamentos y regiones del país es ampliamente analizada en estudios recientes<sup>27</sup>. En 2008, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó al Estado boliviano “(...) aplicar las medidas de índole fiscal dirigidas a una mejor distribución de la riqueza entre la población, tanto en las áreas rurales como urbanas. Al respecto, el Comité le invita a tomar en consideración su declaración sobre la Pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (...)”<sup>28</sup>.

### 2.1.2. Universalización de servicios

#### **Agua y saneamiento**

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2001 y 2014, la proporción de la población boliviana con cobertura de agua potable aumentó de 73% a 84%, logrando alcanzar la meta nacional establecida en 78,5% para el año 2015, cerrando la brecha urbano-rural de 42 a 26 puntos porcentuales<sup>29</sup>. Acerca de la cobertura de saneamiento básico, de acuerdo a estadísticas reportadas por el sector, como muestra la tabla 1.3 del Anexo 1, Bolivia ha logrado mejoras importantes, sin embargo, el ritmo del progreso ha sido más lento en comparación con la ampliación de la cobertura de agua potable. A nivel nacional, en 2014, solo el 56% de bolivianos y bolivianas tenían acceso a este servicio<sup>30</sup>.

Al respecto, además, se debe velar porque el servicio de suministro de agua y la cobertura de saneamiento básico se planifique y desarrolle bajo un enfoque de derechos humanos, tal como lo recomienda, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas: “Asegure que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso, en un pie de igualdad con los hombres y las mujeres que viven en zonas urbanas, a los servicios e infraestructura básicos, como la atención de la salud, la educación, el transporte público, la alimentación, el agua y el saneamiento, las oportunidades de generación de ingresos y la protección social mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité”<sup>31</sup>.

#### **Salud**

En los últimos 10 años, Bolivia consiguió avances significativos en prácticamente todos los indicadores de salud, gracias a la incorporación de programas sociales dirigidos a la población en

<sup>26</sup> Ídem, para más datos sobre la desagregación de las condiciones de educación, salud, y características demográficas según estratos de ingreso.

<sup>27</sup> PNUD (2010). *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia. Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia*; UDAPE (2013). *Séptimo informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances y resultados*.

<sup>28</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) (2008). *Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto. Recomendación N° 27*. Disponible en [www.siplusbolivia.gob.bo](http://www.siplusbolivia.gob.bo).

<sup>29</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>30</sup> Ídem.

<sup>31</sup> Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2015). *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Estado Plurinacional de Bolivia*. Disponible en [www.siplusbolivia.gob.bo](http://www.siplusbolivia.gob.bo).



situación de vulnerabilidad. Además, la política de atención familiar comunitaria e intercultural implementada ha representado una opción factible y un modelo a considerar frente a los de altísimos costos focalizados en la curación, la reparación y los cuidados paliativos prevalecientes a nivel global. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes en cuanto a la calidad, el acceso a la salud y a la mejora en algunos indicadores.

Según información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), para el quinquenio 2003–2008, la mortalidad neonatal (antes de los 28 días de vida) representaba el 54% de la mortalidad infantil (menores de un año) y el 43% de la mortalidad de la niñez (menores de cinco años)<sup>32</sup>. La mortalidad neonatal entre la ENDSA de 2003 y 2008 muestra un estancamiento, es decir que la tasa se ha mantenido en 27 por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal en el área rural aumentó de 35 a 40 por cada 1.000 nacidos vivos y tuvo un incremento pequeño en el área urbana (21 en 2003 y 23 en 2008)<sup>33</sup>. De acuerdo con el Octavo Informe de Progreso de los ODM en Bolivia, UDAPE estimó para el 2013, la tasa de mortalidad infantil en 44 por cada 1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad de la niñez en 56 por 1.000 nacidos vivos.

Bolivia es uno de los países con tasas de mortalidad materna más elevadas de la región. En 2011 la razón de mortalidad materna era de 160 por cada 100.000 nacidos vivos<sup>34</sup>, mientras la media regional para América Latina y el Caribe era de 81 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 2010 (68 en 2015). La mayor parte de las muertes maternas están vinculadas con debilidades en la respuesta y la atención de los servicios de salud<sup>35</sup>. Otros aspectos que explican la mortalidad materna son la violencia y el embarazo en la adolescencia<sup>36</sup>. Respecto al embarazo en adolescentes, entre 2009 y 2013, el indicador presenta un aumento de 77.839 a 90.005. Para prevenir el embarazo a esa edad, juega un papel importante el acceso a información y educación sobre salud sexual y reproductiva, aspecto central en el mantenimiento de esta prevalencia<sup>37</sup>.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebra las medidas adoptadas por el Estado para reforzar la prestación de servicios de salud a las mujeres, que incluye la prestación de servicios de medicina ancestral, pero expresa su preocupación por: a) Las tasas persistentemente altas de mortalidad materna y el acceso limitado a las infraestructuras de salud para mujeres embarazadas, en particular para las mujeres indígenas y las que viven en las zonas rurales; b) La falta de una educación amplia sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, así como sobre los servicios de planificación familiar y el limitado acceso a anticonceptivos modernos, incluidos los anticonceptivos de emergencia; c) La elevada tasa de embarazos en la adolescencia, que puede ser la causa de un aumento de la mortalidad materna; y d) La penalización del aborto y las condiciones restrictivas en que éste puede practicarse, así como la no aplicación de

<sup>32</sup> Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA-2008) citada en la Política de Alimentación y Nutrición (PAN) en el marco del Saber Alimentarse para Vivir Bien, del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición de Bolivia, 2014.

<sup>33</sup> Datos incluidos en el Plan Estratégico Nacional para mejorar la salud materna, perinatal y neonatal en Bolivia (2009 -2015) sobre la Encuesta Nacional de Salud, 2009. Los datos se corroboran con INE.

<sup>34</sup> Ministerio de Salud (2016). *Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011. Resumen Ejecutivo*.

<sup>35</sup> Ídem. Del total de muertes por causa directa (63% del total de muertes maternas), el 59% fueron por hemorragia, 19% por hipertensión y 13% por aborto.

<sup>36</sup> Ídem.

<sup>37</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.





la sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Constitucional por la que se elimina el requisito de la autorización judicial para el aborto en casos de violación<sup>38</sup>.

En relación a la mortalidad por cáncer de cuello uterino estimada para el 2012, ésta alcanzó a 845 mujeres de 25 a 64 años, es decir, un promedio de tres mujeres que mueren por día<sup>39</sup>. Respecto al uso y acceso a métodos anticonceptivos en Bolivia, todavía persiste una baja utilización por parte de las y los adolescentes (sólo el 4.6% usa métodos modernos). Entre 2003 y 2008, la demanda insatisfecha disminuyó en todos los grupos etarios, excepto entre la población adolescente que es la más alta (38%) en relación a los otros grupos de edad (ENDSA 2003 y 2008). En cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), no existen datos de incidencia ni prevalencia de ITS ni del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la población en general, menos aún en la población adolescente y joven, pero según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, en 2015 se registraron 18.460 casos nuevos de ITS en la población de 15 a 19 años, 1.046 casos en hombres y 17.414 en mujeres, lo que representa aproximadamente el 10% del total de ITS en la población en general para el mismo año (180.747)<sup>40</sup>.

Por otro lado, las enfermedades infecciosas prevalentes, así como las enfermedades transmisibles emergentes, todavía ocasionan una gran carga de morbilidad y mortalidad en América Latina como se evidencia en la Tabla 1.4. La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública prioritario para el país, por la elevada incidencia y carga. La carga tiene un discreto, pero constante descenso, por lo que se han reforzado los mecanismos para la mejora de la detección, el tratamiento y la curación. La tasa de incidencia para la TB en 2014 era de 70,8 por 100.000 habitantes<sup>41</sup>. Un tema de preocupación es la presencia de casos de tuberculosis drogo resistente, frente a la cual el programa nacional TB está implementando medidas de control.

En relación a las enfermedades transmitidas por vectores, en 2016 se produjo un incremento de casos de dengue, chikungunya y zika. El departamento de Santa Cruz fue el más afectado. La tendencia de la malaria en Bolivia tiene un comportamiento descendente, ya que entre el 2000 y el 2015 se ha reducido de 30,135 a 6,907 casos registrados<sup>42</sup>. La malaria está focalizada en la Amazonia boliviana, en los departamentos del Beni, La Paz y Pando, que concentra más del 95% de los casos de malaria notificados.

En Bolivia, el VIH constituye un importante problema de salud pública que junto con la tuberculosis y la malaria son de prioridad nacional, debido a la morbilidad y mortalidad que representan. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, la prevalencia de casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en 2014 fue de 116 personas por un millón de habitantes, cifra que, según el Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a partir de 2012 reporta un comportamiento ascendente. La prevalencia del VIH que no llegó a fase SIDA es ocho veces mayor a la prevalencia de la fase SIDA. Más de la mitad de la población que tiene VIH/SIDA se encuentra

<sup>38</sup> (CEDAW) (2015). *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Estado Plurinacional de Bolivia*.

<sup>39</sup> Defensoría del Pueblo (2015). *Informe Defensorial de cáncer de cuello uterino*. (inédito).

<sup>40</sup> Datos del Sistema Nacional de Información en Salud, del Ministerio de Salud, 2016.

<sup>41</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>42</sup> Ídem.

entre los 20 y 34 años<sup>43</sup>. El crecimiento acumulado muestra una tendencia exponencial que se refleja en la aparición de nuevos casos, principalmente en la población en edades más jóvenes.

En los últimos años, los factores de riesgo que derivan en el consumo de drogas (alcohol, tabaco y drogas ilícitas) han aumentado. Entre estos factores se encuentran el fácil acceso a las drogas, la percepción en la población juvenil de que el consumo de drogas representa una actividad de bajo riesgo<sup>44</sup> y la reducción progresiva de la edad promedio en la que las y los adolescentes prueban drogas por primera vez. Según el último estudio de prevalencia en Bolivia<sup>45</sup>, el alcohol y el tabaco son las sustancias que tienen la mayor prevalencia de consumo comparativamente con cualquier otra sustancia lícita o ilícita (48,53% y 25,05%, respectivamente). Las tasas de prevalencia del consumo de drogas ilícitas en la población escolar se han incrementado, aunque en menores niveles que los países de la región. La población en situación de calle registra un significativo consumo de drogas y alcohol<sup>46</sup>.

Según la CPE, el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Sin embargo, datos extraídos de grupos focales con personas en situación de vulnerabilidad muestran que niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC) no acuden a centros de salud cuando presentan algún tipo de afección, debido a que sienten discriminación y maltrato por parte del personal médico; el grupo de personas lesbianas, gay, bisexual, trans e intersex (LGBTI) consultado sostiene que el personal que trabaja en los centros de salud sigue discriminando a este colectivo, especialmente a la población transexual y transgénero<sup>47</sup>. La discriminación también afecta a las personas con discapacidad, quienes en diferentes oportunidades hicieron presentes sus demandas acerca de la falta de cobertura universal de salud.

También es importante tomar en cuenta la perspectiva tradicional/ancestral de la salud y, específicamente, de la medicina que la acompaña. Si bien la Ley N° 459, Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana (2013), constituye un importante hito al regular el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral, así como su articulación con el Sistema Nacional de Salud, dirigentes de organizaciones de pueblos indígenas resaltaron la necesidad de reivindicar la medicina tradicional y empezar a hacer un uso más activo de ella<sup>48</sup>.

### **Nutrición**

Bolivia ha logrado avances importantes en este ámbito, redujo la tasa de subalimentación en casi 50%, del 32,8% en 1992 al 15,9% en 2015, logrando el objetivo del milenio, sin embargo, como muestra la tabla 1.5 del Anexo 1, todavía hay grandes brechas por reducir<sup>49</sup>. Para el 2012, la desnutrición crónica en menores de tres años en áreas rurales (25,9%) era 11 puntos porcentuales mayor que la registrada en áreas urbanas (14,6%); al mismo tiempo, la proporción de niños menores

<sup>43</sup> Ídem.

<sup>44</sup> Según estudios realizados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el 71% de la población juvenil considera que el consumo de drogas no es un hecho grave.

<sup>45</sup> Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) (2014). *Segundo estudio nacional de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares bolivianos de nueve ciudades capitales de departamento, más la ciudad de El Alto*. Este estudio se llevó a cabo con personas de 12 a 65 años de diez ciudades del país.

<sup>46</sup> Datos de la Encuesta de Personas en Situación de Calle, 2014.

<sup>47</sup> Grupo focal LGBTI, realizado como parte del proceso de elaboración de UNDAF.

<sup>48</sup> Grupos focales con CONAMAQ, CIDOB, CNMCIQB “Bartolina Sisa”, realizados como parte del proceso de elaboración de UNDAF.

<sup>49</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2015). *Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y El Caribe*.



de tres años que sufre desnutrición crónica es tres veces mayor en el quintil más pobre respecto al quintil más rico de la población, que se explica tanto por las desigualdades de ingreso como por el acceso y utilización de los servicios públicos<sup>50</sup>. Asimismo, estadísticas departamentales para el 2008 reportaban una brecha importante en la desnutrición crónica en menores de tres años entre el departamento con menor desnutrición (Santa Cruz, 11,2%) y el departamento con mayor desnutrición (Potosí, 42,5%)<sup>51</sup>.

Respecto a la Alimentación Complementaria Escolar (ACE), definición adoptada por el Ministerio de Educación para el desayuno/almuerzo escolar, ha tenido una amplia cobertura desde 2012, llegando a un 97% de los municipios y al 84% de las unidades educativas<sup>52</sup>. El desafío actual es velar por la calidad de las raciones alimenticias, a fin de que cumplan con los requerimientos nutricionales de las y los estudiantes. La ENSA de 2008 muestra que el 61,3% de la población tiene algún grado de anemia, mientras que los datos de la Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición (ESNUT) de 2012 muestran que ha bajado a 60,0%. El problema de nutrición también está relacionado con la malnutrición, que resulta en sobrepeso y obesidad, problema emergente de salud pública. En escolares de secundaria, a nivel nacional en 2012, el 22,5% presentaba sobrepeso y el 4,7% obesidad<sup>53</sup>.

### **Educación**

En Bolivia, a partir de 2010 se ha establecido una nueva normativa educativa nacional, la Ley 70, que establece marcos importantes de transformación de la educación. Uno de los aspectos a resaltar es que la educación se entiende de manera comunitaria, productiva, además de que es intracultural, intercultural y plurilingüe para todo el sistema educativo, dada la alta presencia de pueblos indígenas. Las niñas y los niños de Bolivia deben aprender en su lengua propia e incorporar el aprendizaje de una segunda lengua, la currícula debe incluir conocimientos y saberes de los pueblos indígenas y, de igual modo, se incorpora la participación de la comunidad en la gestión educativa en general.

Los avances en educación son importantes. La escolaridad pasó de seis a nueve años en promedio, de 1992 a 2012, es decir, de primaria completa a tercer grado de secundaria. El alfabetismo llegó a ser casi universal, en 2012 era de 95%. De acuerdo con los resultados del Censo 2012, la tasa de asistencia a un centro educativo de la población de seis a 19 años es de 87%. Una de las medidas que ha mitigado el abandono escolar ha sido la implementación, en 2006, del Bono Juancito Pinto, que tiene como objetivo incrementar la matrícula escolar y reducir la deserción. Las principales razones de abandono escolar de las y los jóvenes entre los 10 y los 24 años son: necesidad de trabajo (37%), económicas (19%) y por embarazo (17%). Además, como consecuencia del embarazo, muchas adolescentes se ven forzadas no solo a abandonar sus estudios sino también a cortar sus proyectos de vida. Particularmente respecto a las jóvenes que dejan de estudiar, el 49% lo hace

<sup>50</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>51</sup> Ídem.

<sup>52</sup> *Diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar de Bolivia*, 2014

<sup>53</sup> Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) (2013). *Encuesta Global de Salud Escolar: Bolivia, 2012*.



debido a que tienen que realizar actividades domésticas en el hogar, cuidado de niñas y niños, personas enfermas, personas con discapacidad y personas adultas mayores<sup>54</sup>.

En relación a la calidad de la educación, el país no cuenta con datos actualizados que midan los aprendizajes de las y los estudiantes. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha confirmado en 2016 la incorporación de Bolivia al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de Educación (LLECE) -organización de la UNESCO- que iniciará procesos de evaluación de la calidad educativa. En este sentido, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE)<sup>55</sup> diseñó la propuesta del Sistema de Evaluación Comunitaria de la Calidad (SECOCE) que constituye la política pública rectora de la Calidad Educativa en el Estado Plurinacional. Para la operativización del Sistema, se diseñaron propuestas específicas de evaluación de la calidad educativa para los Subsistemas de Educación Regular en sus tres niveles (Subsistema de Educación Alternativa y Especial y Escuelas Superiores de Formación de Maestros), enmarcados en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo. El *bullying* o acoso escolar se ha convertido en una nueva preocupación en el sistema educativo, preocupación que se refleja en la inclusión de un artículo específico en las resoluciones ministeriales del subsistema de educación regular a partir de 2015 (RM 001/2015, RM 001/2016). Este artículo sostiene: “el Sistema Educativo Plurinacional, en todas las instancias que lo componen, desarrollará, como parte de la gestión educativa, programas de sensibilización, prevención, capacitación, intervención y protección para todas las personas que integren la Comunidad Educativa, promoviendo la cultura de paz en la convivencia escolar y buen trato en el ámbito educativo, además de la difusión de las consecuencias y secuelas de la violencia, maltrato y/o abuso”<sup>56</sup>. Además, el 2015 se declaró como el año de cero tolerancias al acoso escolar en salones de clases, pasillos, predios escolares o a través del uso de medios de comunicación escrita, tecnológica o cibernética, dentro o fuera de horas de clase<sup>57</sup>. Todavía resta que el sector educativo profundice el aún incipiente desarrollo de competencias bajo el enfoque de derechos para una educación integral de la sexualidad.

Si bien los datos de la Tabla 1.4 (Anexo 1) muestran avances importantes en educación, aún persisten brechas significativas. Por ejemplo, en 2013, una mujer indígena que vivía en el área rural, del quintil más pobre, tenía en promedio tres años de escolaridad, mientras que un hombre que vivía en el área urbana que pertenecía al quintil más rico tenía 16 años de estudio en promedio, es decir, 13 años más<sup>58</sup>. En relación a las personas con discapacidad, si bien hay leyes y políticas que promueven su inclusión todavía faltan mecanismos y procedimientos que garanticen el éxito de esta población en las escuelas regulares.

Aunque los niveles de profesionalización de las y los jóvenes son bastante bajos, la oferta educativa para la formación técnica y profesional de la juventud se ha incrementado, tanto en el sector público

<sup>54</sup> Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO); Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2009). *Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud 2008*.

<sup>55</sup> Encargado de realizar el seguimiento, medición, evaluación y acreditación por mandato constitucional y lo previsto en la Ley de Educación N° 070 y el DS. N° 832.

<sup>56</sup> Resolución Ministerial 001/2016, artículo N° 110, Ministerio de Educación, 2016.

<sup>57</sup> Según el Informe Anual Derechos Humanos – personas lesbianas/gays/bisexuales/transsexuales/transgenero en Bolivia (2014), el *bullying* y la discriminación afectan de manera central la permanencia de la población LGBTI, siendo una de las principales causas de la deserción escolar.

<sup>58</sup> UDAPE (2016). *Hacia una Bolivia más inclusiva y equitativa: Reduciendo las desigualdades sociales para Vivir Bien*. La información corresponde a personas de 19 o más años de edad.



como en el privado<sup>59</sup>. Sin embargo, la situación se dificulta en jóvenes que residen en ciudades distintas de las capitales dada la insuficiente oferta, aspecto que repercute en sus oportunidades en el mercado laboral y en la necesidad de realizar trabajos de baja calificación, con bajo nivel de ingresos y de productividad<sup>60</sup>. En Bolivia se garantiza el acceso de personas con discapacidad a la educación superior, no obstante, persisten muchas barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales, entre otras. La educación superior de calidad no solo es una demanda de las y los jóvenes, sino también de las personas privadas de libertad, principalmente mujeres, ya que poder continuar con estudios técnicos y profesionales en los centros penitenciarios las ayudaría a “distraerse”, “capacitarse”, “prepararse para cuando salgan” y “practicar otros oficios más especializados desde la cárcel”<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> VIO (2014). *Informe Nacional sobre la situación de la Juventud en Bolivia*.

<sup>60</sup> VIO; UNFPA (2009). *Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud 2008*.

<sup>61</sup> Grupo focal con personas privadas de libertad, realizado como parte del proceso de elaboración del UNDAF.

## 2.2 Armonía

El principio de este capítulo, vinculado a la Agenda 2030, es “propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia; no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”<sup>62</sup>. En esta esfera se inscriben los siguientes ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025:



**ODS 5:** Lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer.

**ODS 10:** Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

**ODS 16:** Crear sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia para todos y construyendo instituciones eficaces e inclusivas.

**ODS 10:** Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

**Pilar 1:** Erradicación de la pobreza extrema.

**Pilar 4:** Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

**Pilar 10:** Integración complementaria de los pueblos con soberanía.

**Pilar11:** Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.

En este marco, la presente sección aborda las siguientes temáticas: derechos humanos, racismo y discriminación, violencia, seguridad ciudadana, narcotráfico, justicia y corrupción.

### 2.2.1 Derechos humanos

El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó los 18 principales instrumentos internacionales de derechos humanos de la ONU (10 tratados y ocho protocolos facultativos)<sup>63</sup>. Por otra parte, son evidentes los esfuerzos que el Estado realizó en los últimos años para cumplir con la presentación de informes a los órganos de tratados de la ONU encargados de supervisar la aplicación de los tratados de derechos humanos, ya que algunos de estos informes se encontraban pendientes de presentación desde los años noventa.

Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados, relatorías especiales y Examen Periódico Universal (EPU)<sup>64</sup>, realizadas al Estado Plurinacional de Bolivia, en diciembre de

<sup>62</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

<sup>63</sup> Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Convención sobre los Derechos del Niño (1989); Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006); Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008); Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989); Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000); Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002); Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

<sup>64</sup> El Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado el Examen Periódico Universal en los periodos 2010 y 2014.





2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para la conformación del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos (SIPLUS Bolivia), el cual incorpora también indicadores de derechos humanos que desde 2012 desarrollan el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2014, el Ministerio de Justicia coordinó la elaboración del nuevo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2015-2020) y la Política Plurinacional de Derechos Humanos (2015-2020), documentos que priorizan los derechos contemplados en la Agenda Patriótica 2025<sup>65</sup> y las recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por los diferentes mecanismos internacionales de protección en derechos humanos. Con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, se destacan los continuos avances en la disminución de las brechas entre personas con mayores y menores ingresos económicos, y entre el área rural y urbana. Respecto a los derechos civiles y políticos, continúan los problemas estructurales de la justicia y el sistema penitenciario, que ocasionan graves violaciones de derechos humanos, siendo la problemática más grave la violencia contra las mujeres.

### *2.2.2 Racismo y discriminación*

Todas las temáticas antes mencionadas vienen acompañadas de ciertas problemáticas que no se viven en igual magnitud entre todas las poblaciones, si bien la Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, de 2010, ha significado un importante avance para el país en términos de inclusión, aún persisten expresiones racistas y discriminatorias. Según datos de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, hasta diciembre de 2015 se registraron 771 denuncias, de las cuales 102 son por el grado de instrucción, 85 por apariencia, 80 por razón de género y 74 por procedencia, entre otras<sup>66</sup>. La Ley N° 045 no ha ido acompañada de una política de generación de datos estadísticos desagregados que permita visualizar de manera más clara las problemáticas específicas de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad<sup>67</sup>. Por otro lado, los datos con los que cuenta la Dirección General de Lucha contra el Racismo no son nacionales, debido a la falta de un sistema que permita concentrar información de todas las instituciones que por su naturaleza reciben denuncias sobre delitos de racismo y discriminación, como son la Defensoría del Pueblo, Policía, entre otros.

### *2.2.3 Naturalización de la violencia como práctica sociocultural*

Una de las manifestaciones más significativas de violación de los derechos humanos es la práctica de la violencia contra las mujeres en todas sus formas<sup>68</sup>. A partir de la promulgación de la CPE en 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia ha implementado una política de lucha contra todas las formas de violencia, así como de reconocimiento y protección de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo que se refleja en el desarrollo de un extenso marco normativo, en el cual se ha dado especial importancia a la transversalización de género y la interculturalidad.

<sup>65</sup> Véase A/HRC/25/19/Add.2, párr.2. Citado en Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, marzo de 2015.

<sup>66</sup> Datos publicados en la Memoria 2015 del Comité Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

<sup>67</sup> Este ha sido uno de los temas más mencionados en el proceso de consulta que se realizó a poblaciones en situación de vulnerabilidad (personas privadas de libertad, LGBTI, afrodescendientes, pueblos indígenas, adultos mayores, niños/as y adolescentes en situación de calle).

<sup>68</sup> La Ley 348 “para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” reconoce 16 tipos de violencias: física; feminicida; psicológica; sexual; mediática; contra los derechos reproductivos; contra los derechos y la libertad sexual; simbólica; contra la dignidad; la honra y el nombre; en servicios de salud; patrimonial y económica; laboral; en el sistema educativo; política; institucional; en la familia (doméstica).



En Bolivia, siete de cada 10 mujeres sufren en su vida algún tipo de violencia (física, sexual, psicológica, emocional, económica, etc.), ocupando el primer lugar entre 12 países latinoamericanos<sup>69</sup>. El 75% de las mujeres que ha sufrido violencia no habla de ello y solamente el 17% se atreve a ir a la Policía para denunciar maltrato<sup>70</sup>.

Por otra parte, según datos del Ministerio Público<sup>71</sup>, en 2015 se registraron 93 casos de feminicidio, se obtuvieron 40 sentencias condenatorias, 39 se encuentran en etapa de juicio con acusación formal y cinco casos se archivaron por causa de muerte del imputado<sup>72</sup>. Estos datos muestran un avance significativo en la persecución y sanción de este delito. Sin embargo, es necesario el trabajo coordinado de los diferentes operadores de justicia, dado que existen vacíos y debilidad en la cadena de atención de la violencia contra las mujeres, tanto en la Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses, jueces y juezas, así como servidores públicos<sup>73</sup>, debilidades que se extienden al ámbito municipal, donde también se observa la falta de personal en toda la cadena de atención.

Respecto a la magnitud de la violencia, las investigaciones evidencian que, además de los costos humanos, la violencia contra las mujeres impacta en el gasto de los sectores de salud y justicia, debido a los costos que conlleva tratar a las sobrevivientes y procesar a los agresores. También tiene costos económicos por pérdida de productividad y ausentismo<sup>74</sup>.

El Estado boliviano ha asumido compromisos internacionales respecto a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, y el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) solicita informes periódicos y emite recomendaciones para su cumplimiento. En este marco, la CEDAW<sup>75</sup> señala su preocupación respecto a: 1) Prevalencia de distintas formas de violencia contra la mujer y falta de estrategias para prevenirlas, 2) Falta de información desglosada y actualizada sobre el número de denuncias de actos de violencia contra la mujer, niña y adolescente, 3) Escasos casos de enjuiciamientos y condena respecto a actos de violencia, 4) Prevalencia de procesos de conciliación pese a su prohibición, 5) Demora en el establecimiento de las fuerzas especiales de policía encargadas de luchar contra la violencia hacia las mujeres, principalmente en zonas rurales y alejadas, 6) Falta de personal médico forense para examinar a mujeres víctimas de violencia y 7) Insuficiente apoyo a las víctimas de violencia<sup>76</sup>.

Una de las consecuencias de la violencia son las niñas y niños en situación de calle. Según el Censo de personas en situación de calle 2014<sup>77</sup>, existe un total de 3.768 personas que viven en las calles (73% varones, 27% mujeres), de las cuales el 32% son menores de 20 años. Entre las principales razones por las que afirman vivir en las calles se encuentran el maltrato intrafamiliar, las decepciones, el abandono y fallecimiento de los padres. Además, esta población identifica que los mayores vulneradores de sus derechos relacionados con las agresiones físicas, psicológicas y extorsiones son la Policía, su entorno inmediato, las pandillas, delincuentes y la comunidad misma<sup>78</sup>.

<sup>69</sup> OPS/CDC (2013). *Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales para 12 países*. Entre los países que son parte del estudio se encuentran Guatemala, Honduras, República Dominicana, Haití, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia.

<sup>70</sup> ONU Mujeres (2012). *Los Derechos de las Mujeres: avances y desafíos desde el punto de vista de las mujeres bolivianas*.

<sup>71</sup> Informe de Actividades 2015, enero 2016.

<sup>72</sup> Ministerio Público. Fiscalía General. En: <http://www.fiscalia.gob.bo/webfiscalia/index.php/2016-01-08-20-55-47>

<sup>73</sup> PNUD (2015). Informe de Desarrollo Humano.

<sup>74</sup> OPS (2014). *Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países*.

<sup>75</sup> Ministerio de Justicia, ONU Mujeres (2015). CEDAW. *Cómo enfrentar la discriminación contra la mujer en Bolivia. Observaciones al Estado Plurinacional de Bolivia-07/2015*.

<sup>76</sup> En la tabla 2.1 del Anexo 1 se presenta un resumen de algunos indicadores sobre violencia.

<sup>77</sup> El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, en coordinación con otras instituciones públicas y de sociedad civil, realizó el *Censo de Personas en Situación de Calle*, que incluyó a 10 ciudades de Bolivia.

<sup>78</sup> Ídem.





Una demanda del grupo focal LGBTI considera que es necesario visibilizar la violencia que sufren otros grupos de la población, para los cuales no existen suficientes datos desagregados. La violencia se acentúa en aquellas mujeres, niñas y niños que además forman parte de otro grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad, privadas de libertad, adultas mayores, afrodescendientes, indígenas y jóvenes, entre otros.

#### 2.2.4 Seguridad ciudadana

El crecimiento poblacional, principalmente en áreas urbanas, y los avances sociales y económicos experimentados en el país en los últimos años plantean nuevos retos, entre los que se encuentran una nueva agenda de demandas sociales ligadas a mejoras en el acceso y especialmente a la calidad de los servicios, nuevas expectativas en relación a las condiciones laborales y el surgimiento de nuevas preocupaciones como la inseguridad ciudadana (IDH, 2015)<sup>79</sup>.

La Ley Nº 264, del 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, tiene paradigmas acertados que no se están implementando completamente. La Ley se vincula al Vivir Bien y a una lectura de la seguridad ciudadana directamente relacionada con el desarrollo humano. Sin embargo, el modo en que se hace el gasto, la inversión y la política pública en temas de seguridad ciudadana no acompaña de manera suficiente esta visión. Es igualmente importante promover una cultura de prevención, disuasión y respuesta. Bolivia tiene un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel nacional y algunos observatorios locales, pero persisten problemas de ausencia de datos y reducida confiabilidad, así como limitadas capacidades de análisis.

Una de las formas de violencia y explotación más preocupantes, que está en incremento en los últimos años, es el delito de trata y tráfico. Según informes nacionales e internacionales<sup>80</sup>, en Bolivia la población del área rural y la gente con menos recursos, en su mayoría indígenas, así como las y los jóvenes LGBTI, son particularmente vulnerables a la trata sexual y laboral. Mujeres y niñas son víctimas de trata y tráfico sexual tanto en Bolivia como en países vecinos, sobre todo en las zonas mineras y agrícolas. Los informes de la Dirección Nacional de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado dan cuenta de un total de 2.119 casos de trata y tráfico de personas registrados desde 2012, cuando entró en vigencia la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. El Gobierno boliviano ha asumido diferentes medidas para combatir este flagelo tanto desde el Estado como a nivel internacional<sup>81</sup>, también se ha llevado a cabo diversas campañas y capacitaciones; se ha incorporado la temática en la malla curricular de las escuelas superiores de operadores de justicia y en las investigaciones académicas de universidades públicas<sup>82</sup>. Pese a estos esfuerzos, la comisión del delito de trata de personas es un tema que requiere una mayor atención en la agenda de seguridad ciudadana, para un abordaje integral.

#### 2.2.5 Narcotráfico

Debido a los esfuerzos del Gobierno, en los últimos cuatro años los cultivos de coca se redujeron en 30%. De todas formas, es necesario un monitoreo permanente de estos cultivos para evitar su expansión y su desvío a fines ilícitos. Según los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el

<sup>79</sup> En la tabla 2.2 del Anexo 1 se presentan algunos indicadores sobre seguridad ciudadana.

Se puede consultar el *Informe sobre Trata de Personas 2016*, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

<sup>81</sup> Entre las que destacan: 1) la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas promulgada en 2012; 2) la creación del Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata; 3) Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico y la Ruta de Intervención; 4) creación de la División de Trata y Tráfico de personas en todos los departamentos de Bolivia y 5) la creación de la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. A nivel internacional Bolivia ha firmado un convenio con Chile para coordinar acciones y existe un plan para trabajar en coordinación con los países del MERCOSUR<sup>81</sup>.

<sup>82</sup> Ver el Examen Periódico Universal (EPU) 2014, del Consejo de Derechos Humanos.



Narcotráfico (FELCN), en el primer semestre de la gestión 2016 se destruyeron 2.202 fábricas de elaboración de cocaína base y 36 laboratorios de cristalización de cocaína, frente a 1.581 fábricas de elaboración de cocaína base y 35 laboratorios de cristalización de cocaína en similar periodo de 2015, lo que muestra, por un lado, un mayor esfuerzo de represión, pero, por el otro, una tendencia creciente de esta actividad delictiva. Las rutas utilizadas por este ilícito en muchos casos también son utilizadas para el tráfico de armas, personas, madera y especies silvestres. Otra amenaza es el establecimiento de redes criminales en el país. La falta de datos estadísticos no permite cuantificar la gravedad de la situación y limita el análisis y las posibilidades de acción por parte de las autoridades.

## 2.2.6 Justicia

Los principales problemas estructurales de la justicia son la falta de acceso, escasa independencia judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso. El presupuesto de las instituciones judiciales es insuficiente. Además, el sector es susceptible de corrupción y de influencias políticas<sup>83</sup>.

Respecto a la gestión de las instituciones de administración de justicia, éstas no se identifican como prestadoras de un servicio público, ni al litigante como la razón de ser de dicho servicio. En consecuencia, no definen sus políticas institucionales en términos de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de justicia.

Entre las principales barreras que dificultan el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, se cuentan: a) la falta de acceso físico y reducida cobertura de los servicios de justicia, a pesar del crecimiento poblacional y el incremento del número de causas ingresadas al Órgano Judicial<sup>84</sup>, desde 2014 no se amplió el número de juzgados ni fiscalías<sup>85</sup>, de acuerdo con los últimos datos disponibles hay un juez por cada 11.990 habitantes<sup>86</sup>; b) la retardación de justicia también constituye una barrera para el acceso a la justicia pronta y oportuna, según el Consejo de la Magistratura cada año el 52,6% de causas quedan postergadas para la siguiente gestión<sup>87</sup>; c) la persistencia de obstáculos financieros, sociales, culturales, normativos, jurídicos y fenómenos como el racismo y la discriminación (fundados en el color de piel, origen étnico, edad, sexo, entre otros) impiden el acceso equitativo al servicio de justicia de la población en general, pero principalmente de la población en situación de vulnerabilidad; d) entre las barreras socioculturales que afectan a miembros de pueblos indígenas se encuentran las dificultades lingüísticas y de comunicación por las que atraviesan<sup>88</sup> cuando son parte de algún proceso judicial.

Respecto al enfoque de género en la prestación de los servicios de justicia: a) la aprobación de la Ley 348 ha significado un avance en relación a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, no obstante, se requiere aún clarificar estrategias para la prevención y resolver problemas en la atención a víctimas; b) un 97% de la población LGBT se siente discriminada en la administración de justicia en Bolivia y un 70% considera tener un mal acceso a la justicia<sup>89</sup>. Sin embargo, se identifican

<sup>83</sup> Consejo de Derechos Humanos (2015). *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia*. A/HRC/28/3/Add.2., párrafo 45, 16 de marzo de 2015. Entre 2006 y 2014, la tasa media anual de crecimiento de las causas ingresadas fue de 7,4%, según datos del *Anuario Estadístico Judicial 2014*, del Consejo de la Magistratura.

<sup>85</sup> En 2014, el 41% de los municipios del país (del total de 339 municipios) contaban con un fiscal y el 47% con un juez.

<sup>86</sup> Consejo de la Magistratura (2014) *Anuario Estadístico Judicial 2014*.

<sup>87</sup> Ídem.

<sup>88</sup> Si bien la CPE obliga a los servidores públicos de saber un idioma originario, el proceso aún no se ha concluido, tampoco se cumplen las previsiones de: a) la CPE que obligan al Órgano Judicial a proporcionar un intérprete a los miembros de pueblos indígenas, y b) el Código de Procedimiento Penal, que prevé la participación de peritos culturales en los casos en que sea necesario.

<sup>89</sup> Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC); Conexión Fondo de Emancipación (2014). *Informe Anual Derechos Humanos*.



algunos avances como la conformación de un Comité de Género compuesto por magistradas del Órgano Judicial, que en 2015 logró aprobar una política y plan de acción del Órgano Judicial sobre el tema y en 2016 desarrolló un protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Con relación a la independencia judicial, se observa demora en el proceso de implementación de la Carrera Judicial<sup>90</sup> y el nombramiento de autoridades departamentales de justicia (vocales). En cuanto al presupuesto aprobado para las instituciones judiciales<sup>91</sup>, según el Ministerio de Economía en 2015 se incrementó en 141,8 millones de bolivianos<sup>92</sup>, sin embargo, dicho presupuesto sólo alcanza al 0,49% del Presupuesto General consolidado del Estado<sup>93</sup>.

Sobre el sistema de justicia penal y penitenciario, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario (2016)<sup>94</sup>, los 61 centros penitenciarios del país (19 cárceles y 42 carceletas) albergan a 13.593 personas y existe un nivel de hacinamiento del 162%. Por otra parte, según el Ministerio de Justicia (2015) existen 1180 varones y 111 mujeres adolescentes en conflicto con la ley, privados de libertad en centros especializados. En 2015, la proporción de presos sin condena se redujo en 13% en comparación con el año anterior, de 82% a 69%<sup>95</sup>, a pesar de ello, este porcentaje continúa siendo uno de los más elevados de la región<sup>96</sup>. Además, las personas privadas de libertad viven en condiciones precarias debido a la deficiente infraestructura y falta de prestación de servicios básicos, adolecen de una reducida cobertura de salud y poco acceso a medicamentos al interior de los centros penitenciarios<sup>97</sup>, existen insuficientes programas de reinserción social y seguimiento pospenitenciario, entre otras dificultades que se requiere atender para cumplir los objetivos de la pena (reinserción y rehabilitación social). Todo lo anterior ocasiona graves violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de las niñas y niños que viven con sus padres en los centros penitenciarios.

### *2.2.7 Participación democrática y gestión pública*

Bolivia se encuentra en pleno proceso de transición del modelo de Estado centralizado a un Estado autonómico. Es un proceso que se halla en construcción y que aún tiene un largo camino por recorrer. Los avances alcanzados dan muestras de las dificultades con las que se enfrentan tanto los niveles centrales como subnacionales en la construcción de estructuras e instrumentos de gestión que permitan otorgar mayores grados de autonomía a departamentos, municipios, regiones y autonomías indígenas. Varias tensiones han aparecido durante este proceso. Entre ellas, las más importantes se relacionan con las diferencias en las aspiraciones del Gobierno central y las entidades territoriales autónomas (ETA), en materia de competencias específicas, mecanismos de gestión pública, administración de sistemas tributarios y distribución de recursos.

Las Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC) representan un ambicioso proceso de construcción del Estado Plurinacional. Los territorios que adopten este modelo se transformarán en entes autónomos de su jurisdicción territorial, con sistemas de gobierno de acuerdo a usos y

<sup>90</sup> Considerada por la Constitución de 2009 como una garantía para la independencia judicial y prevista por la Ley N°025 del Órgano Judicial de junio de 2010 (Disposición transitoria cuarta)

<sup>91</sup> Es decir, el presupuesto del Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Escuela de Jueces, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público alcanza a 1.076.107.402 bolivianos (aproximadamente 155.668.817 dólares). Disponible en: [https://www.sigma.gob.bo/php/consultas\\_presupuesto.php](https://www.sigma.gob.bo/php/consultas_presupuesto.php).

<sup>92</sup> Que equivale aproximadamente a 20.518.767 dólares

<sup>93</sup> En: [https://www.sigma.gob.bo/php/consultas\\_presupuesto.php](https://www.sigma.gob.bo/php/consultas_presupuesto.php).

<sup>94</sup> Dirección General de Régimen Penitenciario, presentación del proyecto del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, La Paz, 12 noviembre 2015.

<sup>95</sup> Datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, del Ministerio de Gobierno.

<sup>96</sup> La media latinoamericana es de 46,38% de detenidos preventivos, Paraguay posee el porcentaje más alto (73%) y Nicaragua el más bajo (12%). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13.

<sup>97</sup> Estas fueron las necesidades más mencionadas a momento de realizar las consultas a hombres y mujeres privadas de libertad.

costumbres, pero no tendrán el control de recursos naturales de manera autónoma. Charagua es el primer municipio en constituirse en autonomía indígena originaria campesina. En 2015, en el marco del Referendo Autonómico, se realizaron cinco consultas para la aprobación de estatutos autonómicos departamentales, tres consultas sobre cartas orgánicas municipales y dos consultas de estatutos autonómicos indígena originario campesinos. En 2016, seis entidades territoriales autónomas aprobaron sus cartas orgánicas, tres municipios aprobaron su conversión a AIOC, y se aprobó el primer estatuto de autonomía regional. Aunque el proceso de autonomías indígenas es aún incipiente, se prevé que su desarrollo llevará a un cambio en el mapa y en el campo político. Las transferencias de recursos desde las gobernaciones a las AIOC, así como la asignación de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes de acuerdo a las características culturales, son ejemplos de transformaciones con repercusiones en el ámbito político y de la gestión pública.

A partir de la implementación de la nueva CPE, la estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional incorpora la participación efectiva de los pueblos indígena originario campesinos (IOC) en decisiones políticas; para ello establece siete circunscripciones especiales, que incluyen la participación proporcional de las naciones y los pueblos IOC. Al mismo tiempo, también se afianza la participación de éstos en instancias del Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Órgano Electoral. Hay representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las cámaras de Senadores y Diputados, según criterio de pertinencia.

Las mujeres han sido parte activa y determinante en los momentos críticos del cambio sociopolítico y de construcción y recuperación de la democracia, lo que les ha otorgado la legitimidad para participar en paridad en los espacios de toma de decisión del nivel central, departamental y municipal. Desde 2015, Bolivia es el segundo país en el mundo después de Ruanda en haber alcanzado la paridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las últimas elecciones subnacionales de 2015 también tuvieron como resultado un incremento considerable en la participación política de las mujeres en las asambleas departamentales y el logro de la paridad en los concejos municipales. No obstante, la participación de las mujeres en el Ejecutivo es menor al 30%, no hay ni una sola mujer en las gobernaciones departamentales y a nivel municipal las alcaldesas apenas son el 8%.

A pesar de existir la Ley 243, de 2012, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, las mujeres electas sufren distintas formas de presión, conocidas como “acoso y violencia política”, que las obliga a dejar el cargo para ser sustituidas por un suplente hombre. Hasta la fecha no se tienen cifras oficiales sobre la incidencia de esta forma de violencia contra las mujeres; no obstante, la Asociación de Concejalas de Bolivia reportó en 2014 que, de 272 casos denunciados, 13 habían sido resueltos por la vía Constitucional y Administrativa, sin embargo, hasta la fecha, ningún caso de acoso y violencia política habría sido sancionado por la vía penal<sup>98</sup>. En octubre de 2016 se promulgó el Decreto Supremo Nº.2935 que reglamenta la Ley 243 y que contribuirá a su aplicación plena.

### 2.2.8 Corrupción

La corrupción en todos los niveles de Gobierno y especialmente en el nivel municipal sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Bolivia, aunque no existen datos oficiales relativos al daño económico que causa este fenómeno a nivel nacional. Las principales dificultades en el nivel municipal están relacionadas con la falta de transparencia y de rendición de cuentas, la falta de conocimiento de las normas y la debilidad institucional. Existe una alta permisividad social y tolerancia frente a la corrupción, tanto por parte de los servidores públicos como de la población en general. Estos problemas están interrelacionados y tienen un impacto corrosivo en la

<sup>98</sup> Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) (2014). *Boletín* N° 7.



gobernanza democrática. La falta de transparencia, junto con el bajo nivel de participación ciudadana y de control social, crea un ambiente ideal para las prácticas corruptas.

De acuerdo con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC), en 2015 los gobiernos municipales han sido las instituciones más denunciadas por hechos de corrupción (30% de las denuncias), conjuntamente la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ordena congelar las cuentas de casi 100 gobiernos municipales por esta razón. Según datos del Ministerio de Transparencia<sup>99</sup>, se procesó a 132 alcaldes por hechos de corrupción desde 2010, logrando 27 sentencias. En octubre de 2016, 17 alcaldes elegidos en 2015 fueron enjuiciados por hechos de corrupción.

El Gobierno de Bolivia ha demostrado su voluntad de luchar contra la corrupción y de fortalecer la transparencia y el control social, temas reflejados en los pilares 4 y 11 de la Agenda Patriótica 2025. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, adoptada en 2007, constituye la piedra angular de estos esfuerzos. Bolivia cuenta con un Viceministerio de dedicado exclusivamente a la transparencia institucional y a la lucha contra la corrupción<sup>100</sup>. El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley de Acceso a la Información y prevé lanzar en 2017 un Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, el cual incluye como uno de sus componentes centrales la implementación de una política de datos abiertos.

<sup>99</sup> Datos publicados en La Razón, el 16 de octubre de 2016.

<sup>100</sup> Hasta enero de 2017 se constituía en Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.



## 2.3 Prosperidad

El abordaje de la esfera Prosperidad tiene como base la meta planteada en la Agenda 2030 para “velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.”<sup>101</sup>. Esta esfera engloba la conjunción de los siguientes ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025<sup>102</sup>:



**ODS 2:** Hambre Cero.

**ODS 7:** Acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

**ODS 8:** Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos.

**ODS 9:** Infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva y sostenible e innovación.

**Pilar 1:** Erradicación de la pobreza extrema.

**Pilar 2:** Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien.

**Pilar 4:** Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

**Pilar 5:** Soberanía comunitaria, financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

**Pilar 6:** Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.

**Pilar 7:** Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

**Pilar 8:** Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.

En este marco, la presente sección abordará las siguientes temáticas: Producción, migración, pleno empleo y trabajo decente, desarrollo rural, agricultura, seguridad y soberanía alimentaria, investigación, desarrollo tecnológico sostenible e innovador y planificación participativa para la implementación de las políticas públicas.

### 2.3.1 Producción industrial

La visión del Gobierno es incentivar la producción para salir de la pobreza. Esto pasa por industrializar materias primas, producir energía eléctrica para consumo interno y para exportación, e industrializar el litio, el gas y las cadenas agrícolas para que puedan resistir las fluctuaciones de los precios de las materias primas<sup>103</sup>. Desde una perspectiva de diversificación de la matriz productiva, los desafíos se encuentran en el incentivo de actividades que, más allá de los sectores estratégicos, permitan el crecimiento de un tejido empresarial más robusto, diverso y productivo. Ello implica atender factores tales como la adopción tecnológica, el apoyo a empresas y microempresas en

<sup>101</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

<sup>102</sup> La tabla 3.1 del Anexo 1 presenta un resumen de indicadores para esta sección.

<sup>103</sup> PNUD (2016). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe*.





sectores generadores de empleo, acceso a capital financiero y físico, así como la promoción de la asociatividad público-privada y privada-privada. El Gobierno tiene un claro objetivo de diversificación de la matriz productiva, plasmado en el PDES 2016 – 2020 y dirigido a la articulación sectorial en pro del mejoramiento de los procesos de producción, fortalecimiento en financiamiento, formación y acceso a tecnología de las MyPes y PyMES.

Los desafíos tienen que ver con dar pasos sostenidos para avanzar en el desarrollo de las industrias vinculadas a estos sectores estratégicos con participación de inversión pública y movilizándolo inversión privada nacional e internacional en iniciativas de carácter mixto y estatal. Consolidar los esfuerzos ya iniciados en los últimos años para fortalecer el desarrollo del sector manufacturero e industrial y agropecuario, apuntando a la agregación de valor en una diversidad de recursos naturales y apuntando también sectores vinculados a la economía creativa o economía del conocimiento es otro de los desafíos. Así también se debe articular las empresas productivas nacionales estratégicas con las iniciativas productivas de los privados y particularmente con las microempresas y avanzar en el empoderamiento de las mujeres y jóvenes con actividades productivas de agregación de valor y gerencia de negocios inclusivos.

Bolivia ha transitado a una situación de país de renta media baja, con una perceptible inclusión de un importante contingente poblacional a la vida económica del país, reflejado en el importante crecimiento de la clase media<sup>104</sup>. En este escenario, las aspiraciones y las demandas de la población han cambiado en materia de necesidades y aspiraciones. Existe un cambio en los patrones de consumo de la población boliviana, lo que genera una sociedad de consumo masivo. La movilidad social en general ha sido “corta”, es decir se ha pasado de estratos pobres de ingresos a una clase media vulnerable que ha utilizado su mayor poder adquisitivo en el aumento y la mejora del consumo de bienes de primera necesidad –específicamente alimentos y educación. El desafío de política pública radica en encontrar mecanismos que promuevan no solo la mejora en los ingresos, sino la estructura de incentivos apropiados para permitir la satisfacción de necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad, junto con esquemas de redistribución tributaria y de gasto público que aminoren las distancias económicas<sup>105</sup>.

### 2.3.2 Migración

La tasa de migración rural-urbana se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años<sup>106</sup>, convirtiéndose en un factor que repercute, entre otros, en la incidencia de la pobreza y en el abandono de niñas y niños y personas adultas mayores en las áreas rurales. Los principales motivos de esta migración tienen que ver con aspiraciones personales: acceder a mejores condiciones laborales, académicas y económicas, aunque no siempre se alcanzan las metas planificadas<sup>107</sup>; otros factores que podrían estar provocando las altas tasas de migración son el cambio climático, que influye directamente en los sistemas de producción tradicionales, así como nuevas necesidades tecnológicas. La migración produce un acelerado crecimiento urbano. El ejemplo emblemático es la

<sup>104</sup> Para más información ver el *Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia: El nuevo Rostro de Bolivia. Transformación social y metropolización*, PNUD, 2015.

<sup>105</sup> PNUD (2016). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso Multidimensional: Mas allá del ingreso*

<sup>106</sup> De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2012, la tasa de urbanización a 2012 alcanzó a 67,5%, lo que significa que alrededor de 7 millones de personas residen en las áreas urbanas del país.

<sup>107</sup> Las personas LGBTI consultadas consideran también que el ser LGBTI es un factor que provoca la migración del área rural al área urbana. Otro de los grupos en situación de vulnerabilidad en los que se acentúa la tasa de migración rural-urbano son los NNASC, dada la anonimidad con las que se asocia la urbe. Es decir, y de acuerdo con lo que afirman algunos representantes de instituciones que trabajan con NNASC, “muchos de ellos viven en el campo y son maltratados por sus familias, entonces vienen a la ciudad porque saben que aquí nadie los va encontrar y además pueden hasta cambiar su nombre”.



ciudad de El Alto, con un crecimiento poblacional intercensal de 2,4%, entre 2001 y 2012, siendo su tasa de urbanización una de las más rápidas del mundo<sup>108</sup>. Este crecimiento metropolitano acelerado presenta desafíos relativos a la planificación y la ordenación urbana y regional, la infraestructura básica y la prestación de servicios básicos u otras políticas conexas, a fin de planear, diseñar y construir asentamientos humanos sostenibles teniendo en cuenta su efecto en el medio ambiente.

Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas notó con interés que el Estado boliviano integró por primera vez en el Censo poblacional de 2012 preguntas relativas a la migración. Sin embargo, el Comité evidencia la falta de información del Estado en lo que respecta a los migrantes en tránsito, las mujeres migrantes, las niñas y los niños migrantes no acompañados y los trabajadores migratorios fronterizos y de temporada. En particular, preocupa al Comité la limitada coordinación que existe entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Dirección General de Empleo y la Dirección General de Migración con respecto a la información relacionada con la migración<sup>109</sup>.

En cuanto a la migración internacional, de acuerdo con un comunicado<sup>110</sup> emitido por el Banco Central, las remesas enviadas por trabajadoras y trabajadores bolivianos en el extranjero a noviembre de 2016 ascendieron a 1.092,6 millones de dólares, siendo Santa Cruz el departamento de mayor recepción (38,8%), seguido por Cochabamba (33%) y La Paz (15,4%). Estos montos ayudan a paliar la extrema pobreza<sup>111</sup>.

### 2.3.3 Pleno empleo y trabajo decente

El crecimiento económico debe verse reflejado en el empleo pleno y productivo, el cual ha mejorado en los últimos 14 años (la tabla 3.5 del Anexo 1 presenta datos sobre Población Ocupada por Área Geográfica, según Tipo de Administración de la Unidad Económica y Sexo). Sin embargo, persisten los empleos que ofrecen ingresos inferiores a la línea de pobreza. Este problema se agudiza entre las y los jóvenes, el 90% de ellos no tiene un contrato formal (permanente o eventual). El desempleo juvenil afecta más a las mujeres y se trata de una brecha que ha tendido a incrementarse entre 2000 y 2012<sup>112</sup>. La mayoría de los empleados pobres y vulnerables son trabajadores de pequeñas empresas, que trabajan por cuenta propia, sin calificación ni ingresos fijos.

Pese al gran crecimiento de la población en áreas urbanas, según datos del INE, en 2014 todavía la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, ganadería, caza y pesca (34%)<sup>113</sup>, seguida de los comerciantes al por mayor y menor y quienes se encargaban de la reparación de vehículos (16%)<sup>114</sup>. Según el INE<sup>115</sup>, en 2014, el 5,8% de la población ocupada urbana tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza, porcentaje que en el mismo año alcanza el 35% en el caso de la población ocupada en zonas rurales. El reto es lograr el trabajo decente a través de una combinación de políticas que favorezcan la estabilidad laboral de las ocupaciones en relación de dependencia, porque la estabilidad garantiza el ingreso y puede facilitar el acceso a servicios básicos.

<sup>108</sup> Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012). *Censo de Población y Vivienda*.

<sup>109</sup> Comité de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, 2013. Disponible en [www.siplusbolivia.gob.bo](http://www.siplusbolivia.gob.bo)

<sup>110</sup> Banco Central de Bolivia (BCB) (2016). *Comunicado de prensa sobre el nivel de remesas de trabajadores*. Publicado el 20 de junio de 2016.

<sup>111</sup> Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FMI - FOMIN) (2010). *Programa de Mejora de la información y procedimientos de los bancos centrales en el área de remesas: Bolivia*

<sup>112</sup> ONU Mujeres (2016). *Estado de situación de la mujer en Bolivia*.

<sup>113</sup> Datos del INE disponibles en : [www.ine.gob.bo](http://www.ine.gob.bo)

<sup>114</sup> La tabla 3.3 del Anexo 1 presenta datos sobre el empleo en el sector privado.

<sup>115</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.





Este escenario lleva a reflexionar no solo sobre los acuerdos entre empleados y empleadores para la distribución de los beneficios, sino también es necesario crear modelos innovadores de protección social (salud y jubilación) para los trabajadores de los sectores de la economía popular no asalariada y de empleo precario, incluso en el sector formal. Existe un desfase entre la mano de obra que el Estado y el sector privado necesitan y la educación que está recibiendo la juventud. Abordar aspectos de educación técnica, uso de tecnologías de información, educación superior no universitaria, son solo algunos de los elementos de las decididas intervenciones estatales que se requieren.

La participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región, 62%, frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue siendo menor que la de los hombres. También existe un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad y una importante concentración en sectores de baja productividad, particularmente en el caso de las mujeres indígenas<sup>116</sup>, 60% de las mujeres se encuentran insertas en este tipo de ocupaciones, en el caso de los hombres el 40%. Este dato sobre empleo vulnerable femenino se encuentra muy por encima del promedio de la región que es del 30.5% en el caso de las mujeres y 32.8 en el caso de los varones.<sup>117</sup> En Bolivia, entre 2008 y 2015, la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementó de 60 a 410 bolivianos<sup>118</sup>.

Estos problemas están muy vinculados con la dimensión “privada” del trabajo: el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado de la población infantil, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Estas tareas recaen fundamentalmente en las mujeres y niñas, sobre todo en las más pobres, sumiéndolas en un círculo vicioso de informalidad y precariedad laboral. Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una Encuesta de Uso del Tiempo que permita establecer con mayor precisión la situación laboral en el país. En otros países de la región se ha establecido que las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo al trabajo doméstico que los hombres y esta situación se incrementa en condiciones de mayor ruralidad y mayor pobreza de los hogares. Contar con esta información es una prioridad pues se requiere avanzar en políticas de protección social que saquen el problema del cuidado del ámbito exclusivamente privado, familiar y femenino y lo conviertan en un problema público y concerniente también a los hombres.<sup>119</sup>

También se considera que la pobreza en las áreas rurales genera condiciones para que las y los adolescentes migren a las ciudades en busca de trabajo (en un primer momento solo en la época de vacaciones escolares), y es, precisamente, en estos espacios laborales (precarios e informales) donde se generan redes de niñas, niños y adolescentes que, motivados por las necesidades económicas y la independencia, deciden dejar a sus familias y vivir en las calles<sup>120</sup>.

Al respecto, la CEDAW afirma estar preocupada por la persistente brecha entre los géneros en el empleo y recomienda al Estado boliviano que: a) Promueva el acceso de la mujer al empleo formal; b) Adopte medidas para promover el acceso de la mujer a los puestos de gestión, incluidos los llamamientos específicos para la promoción de la mujer y la formación en aptitudes de liderazgo impartida a las mujeres en todas las esferas de la economía, y realice campañas de sensibilización entre los empleadores sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo; c) Desarrolle un sistema de presentación de quejas confidenciales sobre la discriminación por motivo de sexo y el acoso sexual en el lugar de trabajo y vele porque las víctimas tengan acceso efectivo a mecanismos de reparación; d) Vele porque las mujeres y las niñas que son trabajadoras domésticas

<sup>116</sup> Banco Mundial (2015). *Género y etnicidad en Bolivia: intersección clave a considerar para promover el desarrollo equitativo*.

<sup>117</sup> ONU Mujeres (2016). *Estado de situación de la mujer en Bolivia*.

<sup>118</sup> INE (2015). *Salarios, remuneraciones y empleo del sector privado 2008-2015*.

<sup>119</sup> PNUD (2016). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso Multidimensional: Mas allá del ingreso*.

<sup>120</sup> Grupo Focal con instituciones que trabajan con NNASC, realizado como parte del proceso de elaboración del UNDAF.



tengan acceso a recursos efectivos para presentar quejas sobre conducta abusiva y explotación por parte de sus empleadores y vigile sus condiciones de empleo.

### 2.3.4 Desarrollo rural

La pobreza rural sigue siendo un desafío clave para Bolivia. Los programas de desarrollo integral en el área rural han contribuido a reducir la dependencia de los productores frente a los monocultivos, jugando un papel importante para la diversificación productiva, la generación de empleos e ingresos, el fortalecimiento de la productividad, el manejo sostenible de los recursos naturales y una mejor resiliencia frente al cambio climático. Sin embargo, los rendimientos de los cultivos producidos por agricultores familiares aún son bajos<sup>121</sup>.

En este contexto, la vertebración caminera ha sido notable en los últimos años. Por otra parte, las acciones del Estado respecto al abastecimiento de agua para riego, también muestran importantes resultados. Además, el Estado ha puesto en marcha los programas “Mi Agua” y “Mi Riego” que han permitido incrementar la cobertura de agua potable en 90% en el área urbana y 61% en el área rural, al 2012, y se ha aumentado la cobertura de riego a 362.000 hectáreas al 2014, sobre la base de la gestión integral y comunitaria de los recursos hídricos<sup>122</sup>. El Censo Agropecuario 2013 empadronó el 32,4% de la superficie total del país. La superficie agrícola llega a 3.572.701 hectáreas, de las cuales la mayor parte son tierras cultivadas en verano, en segundo lugar, están los pastos cultivados y, en tercer lugar, las tierras en descanso y las tierras en barbecho<sup>123</sup>.

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el periodo 2006-2016, ha titulado 70.855.613 de hectáreas, emitiendo un total de 693.109 títulos agrarios para 1.6 millones de personas beneficiarias; mientras que en el periodo 1996-2005 se titularon 9.3 millones de hectáreas y se emitieron 26 mil títulos para casi 175 mil beneficiarios. Por otra parte, en el periodo 2006-2015, se atendió a todos los sectores del agro con énfasis en pequeños propietarios. Las mujeres se beneficiaron con el 46% de la titulación de la tierra en el periodo 1996-2015<sup>124</sup>, aunque todavía persisten algunos obstáculos para la tenencia, herencia y propiedad de la tierra por parte de las mujeres.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sigue preocupado por la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en Bolivia, reflejada en el analfabetismo femenino, el acceso al trabajo y la desigualdad de remuneración por igual trabajo, las dificultades de acceso a la vivienda y tenencia de la tierra. Asimismo, el Comité observa que los planes y programas sociales, económicos y culturales del Estado boliviano carecen de un enfoque transversal de género y recomienda que este enfoque transversal se incorpore a todas las políticas públicas. El Comité pide al Estado que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces y dotando de recursos económicos para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer incluyendo la igualdad de salarios, el acceso a la vivienda y a la tenencia de las tierras.

<sup>121</sup> Esta información fue recogida por los grupos focales realizados como parte del proceso de elaboración del UNDAF. Al respecto, cabe señalar que las mujeres adultas que viven en el área rural consideran que se podría fortalecer el autoabastecimiento alimentario mediante políticas que les permitan a ellas cultivar, y de esta forma también mantenerse activas laboralmente. Por otro lado, dirigentes de la CNMCI OB “BS” afirman que, si bien es importante el haber asumido una lógica de desarrollo integral en el área rural, también es necesario que esa lógica mantenga y promueva las formas comunitarias.

Estado Plurinacional de Bolivia, Contribución Prevista Determinada nacionalmente del estado plurinacional de Bolivia, 2015.

<sup>123</sup> Datos disponibles en: <http://www.inra.gob.bo/>

<http://www.inra.gob.bo/InraPb/upload/SEPARATA%202015.pdf?jsessionid=A34D9CB0F74704EC9284C238D9E81A7B>

<sup>124</sup> Ídem.



Las relaciones de género y los roles históricamente asociados a los hombres y mujeres también impactan en los problemas productivos. En Bolivia, la pequeña agricultura comunitaria tiende a quedar sistemáticamente en manos de las mujeres<sup>125</sup>. El trabajo de las mujeres rurales se centra en la producción agropecuaria y se combina con las labores domésticas y del cuidado. Por lo general, las mujeres trabajadoras rurales no perciben ingresos propios y para fines de políticas, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, el trabajo de las mujeres rurales es considerado como complementario de la actividad económica familiar. Ellas se encuentran entre la población más pobre y discriminada en su derecho a la educación, la salud, el acceso a servicios, al patrimonio productivo, a un empleo digno y a una remuneración justa e independiente<sup>126</sup>.

Las inversiones en infraestructura como transporte, riego, energía y tecnologías de la información y comunicación son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible, empoderar a las comunidades, incrementar la productividad y mejorar los resultados en salud y educación; además, considerando la alta vulnerabilidad a los cambios climáticos, estas infraestructuras deben ser resilientes. Desde otro punto de vista, considerando la mayor concentración de población indígena en el área rural, es importante que el modelo de desarrollo rural considere las características productivas y de organización social de la producción de las comunidades indígenas. Esto implica el fortalecimiento de las visiones de desarrollo de estas poblaciones, el respeto y promoción de las formas de producción y trabajo comunitario y otros mecanismos o formas de organización para la producción.

### 2.3.5 Seguridad y soberanía alimentaria

Bolivia logró un alcance notable en términos de reducción de la inseguridad alimentaria, ésta se redujo del 38% en 1992 al 15.9 % en 2015, es decir, la tasa de malnutrición disminuyó en un 50% logrando el objetivo del milenio<sup>127</sup>. Por otro lado, en 2012 se construyó el Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria<sup>128</sup> identificando tres categorías de vulnerabilidad con indicadores de disponibilidad, acceso y uso de alimentos en los 339 municipios: 30% enfrenta alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 59% a la vulnerabilidad media y 11% a la vulnerabilidad baja<sup>129</sup>. La promoción de la agricultura familiar es un tema prioritario en Bolivia para superar la desnutrición y mejorar la alimentación. Según datos del Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras, existen 775 mil unidades productivas, de las cuales el 94% pertenecen a la agricultura familiar<sup>130</sup>.

La Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, promulgada el 26 de junio de 2011, identifica las causas estructurales de inseguridad alimentaria, que son: 1) Presión demográfica y creciente demanda de alimentos a nivel Internacional, 2) Crisis financiera mundial, 3) Producción de agrocombustibles y 4) Cambio climático (desastres naturales). En la aplicación de esta Ley, a la fecha se ha logrado la reglamentación del fortalecimiento al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), a los asentamientos humanos, al consumo nacional, al dialogo de saberes, al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), a la creación y fortalecimiento del Seguro Agrario y el acceso a créditos. En esta misma línea, se promulgaron la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, y la Ley 622 de Alimentación Escolar en el Marco

<sup>125</sup> Fundación Tierra (2014). *Mujeres rurales, tierra y seguridad alimentaria*.

<sup>126</sup> PNUD (2015). *Informe de Desarrollo Humano*.

<sup>127</sup> FAO, PMA y FIDA (2015). *Informe del Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo*.

<sup>128</sup> Citado en el documento de la *Política de Alimentación y Nutrición (PAN) en el marco del Saber Alimentarse para Vivir Bien*, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2012

<sup>129</sup> Ídem.

<sup>130</sup> FAO (2013). *Boletín de Agricultura Familiar*.



de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, que fomenta la producción local de alimentos para su consumo a través de estos programas. La aplicación plena de estas leyes requiere un proceso continuo de socialización y capacitación tanto a productores (oferta) como a gobiernos municipales y programas (demanda).

El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) elaboró la Política de Alimentación y Nutrición que plantea la coordinación de acciones multisectoriales para la provisión de, por ejemplo, la alimentación escolar en todos los municipios del país, priorizando la producción local a través de las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS), Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) y MyPES<sup>131</sup>.

Aunque el PIB agropecuario se ha triplicado entre 2005 y 2014, su contribución relativa disminuyó de 13% a 10%<sup>132</sup>; mientras tanto, una tercera parte de la población económicamente activa trabaja en el sector agropecuario, convirtiéndose en el de menos rendimiento per cápita<sup>133</sup>. Sin embargo, el poder de compra de diferentes programas del Estado, como la alimentación escolar o la reserva estratégica de alimentos, presentan la oportunidad de dinamizar el sector agropecuario, con énfasis en fortalecer la agricultura familiar y al pequeño productor.

### *2.3.6 Investigación, formación especializada y desarrollo tecnológico sostenible e innovador*

El desarrollo del sector productivo requiere sectores industriales dinámicos que ofrezcan oportunidades de empleo, en particular para mujeres y jóvenes, que no solo generen ingresos, sino que generen una mejora de las aptitudes, las habilidades, las condiciones de trabajo y los sueldos. El desafío tiene que ver con el fomento de la investigación sobre tecnologías adecuadas, sostenibles, que recuperen saberes ancestrales y sean innovadoras. Considerando que muchas estrategias de desarrollo y crecimiento adoptadas en el pasado estimulaban una rápida acumulación de capital físico y financiero, generando un agotamiento y una degradación excesiva del capital natural, incluido el patrimonio de recursos y ecosistemas naturales, se requiere un incremento de las tecnologías industriales ambientalmente adecuadas y la aplicación de metodologías de producción más limpia, en el marco de un desarrollo tecnológico sostenible e innovador.

### *2.3.7 Planificación participativa para la implementación de las políticas públicas*

El proceso de planificación integral participativa tiene como base la nueva Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y su mayor desafío tiene que ver con su implementación. Este nuevo sistema tiene como paradigma incorporar a los viejos esquemas de planificación la “especialización” o territorialización de las políticas públicas. La mencionada Ley fue promulgada en enero de 2016 y su cumplimiento lleva a la formulación de Planes de Desarrollo Territorial Integral (PTDI) y Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI), que catalizan una visión de planificación para el desarrollo territorial promoviendo que los distintos sectores del aparato de Gobierno, a nivel nacional y subnacional, planifiquen de modo integral. Sin embargo, muchos de ellos siguen usando metodologías de elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) y los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), que vienen desde la Ley de Participación Popular.

<sup>131</sup> Ley N° 338 de OECAS y de OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, promulgada el 26 de enero de 2013.

<sup>132</sup> PDES 2016-2025

<sup>133</sup> Datos disponibles en: [www.ine.gob.bo](http://www.ine.gob.bo).



La Ley 777, como herramienta de planificación participativa-territorial, crea institucionalidad y convergencia, ya que articula a las entidades, instituciones y empresas públicas bajo su dependencia, tuición o sujeción, según corresponda, a las características del sector. La Ley es integradora, bajo el enfoque de la gestión a partir de los Sistemas de Vida, que busca las integralidades para el desarrollo productivo a partir de la identificación de las potencialidades y limitaciones del territorio<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Mandato contenido en la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), promulgada el 21 de enero de 2016.

## 2.4 Madre Tierra

Esta esfera tiene como base la meta de la Agenda 2030 relativa a la protección del planeta contra la degradación mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras”<sup>135</sup>.

El Capítulo engloba los siguientes ODS y pilares de la Agenda Patriótica 2025:

<b>ODS12:</b> Modalidades de consumo y producción sostenibles.	<b>Pilar 1:</b> Erradicación de la pobreza extrema.
<b>ODS 13:</b> Medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	<b>Pilar 2:</b> Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien
<b>ODS15:</b> Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los bosques, luchar contra la desertificación, invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	<b>Pilar 3:</b> Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.

En este marco, se abordará las siguientes temáticas: Cambio climático y cuidado de la Madre Tierra, pérdida de biodiversidad, matriz energética a futuro, gestión de residuos sólidos industriales.

### 2.4.1 Cambio climático y cuidado de la Madre Tierra

Bolivia cuenta con la Ley 071, de Derechos de la Madre Tierra, sancionada el 21 de diciembre de 2010, que reconoce que la Madre Tierra es sagrada y tiene derecho a la vida, la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. Esta normativa establece además los deberes del Estado y la sociedad para su protección, creando la Defensoría para la Madre Tierra. En la misma línea se encuentra la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de octubre de 2012, que establece la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.

Bolivia también ha promulgado leyes que permitieron encarar responsablemente y con amplia participación ciertas acciones dirigidas a la eliminación gradual de las Sustancias Agotadoras de

<sup>135</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.





Ozono (SAO), promovidas por la Comisión Gubernamental del Ozono (CGO), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua<sup>136</sup>.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el país ha perdido aproximadamente el 38% de la superficie glaciar respecto a la superficie durante los años ochenta<sup>137</sup>, se prevé temperaturas más altas y eventos de precipitación más fuertes durante la época de lluvias, que exponen a las diferentes regiones del país a la prolongación de las épocas secas y a un incremento en la frecuencia y magnitud de las inundaciones, riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas<sup>138</sup>. La pérdida de los glaciares y el derretimiento de la nieve, combinados con una mayor degradación de la cuenca lacustre, están amenazando el suministro de agua disponible.

Si bien Bolivia tiene una importante cobertura boscosa (una de las más altas per cápita en el mundo) también está experimentando un aumento en la deforestación. Una importante parte de esta deforestación se debe a la tala ilegal y selectiva, que ha aumentado de forma significativa en algunas partes del territorio, desde 2014. A esto se debe sumar el tráfico ilícito de madera, flora y fauna silvestre del país, que posee una amplia riqueza y diversidad natural. Este tráfico ilegal es un delito transfronterizo y de implicación internacional. Las redes de tráfico, en muchos casos, comparten las rutas de tráfico de drogas, armas y personas.

La exposición a la variabilidad del clima y a los desastres naturales ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que representa una amenaza crítica para la supervivencia de la población boliviana y particularmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes y las poblaciones indígenas, en cuyos territorios tienen el peor efecto<sup>139</sup>. Los efectos se evidencian en los sectores sociales (salud, educación, vivienda), económicos (agropecuaria e industria) y de infraestructura y servicios, los cuales afectan los medios y el modo de vida y producción de las poblaciones en situación de vulnerabilidad<sup>140</sup>. De 1982 a 2014, más de cuatro millones de habitantes han sido afectados directamente por estos fenómenos, cerca del 40% de la población boliviana, con un impacto económico de entre 1 y 2% del PIB, dependiendo de la gravedad del evento climático. Para 2030, el 27% del territorio nacional podría estar afectado por una sequía persistente y el 24% por inundaciones altamente recurrentes<sup>141</sup>.

En Bolivia, en el periodo 2002-2012, se produjeron 4.770 eventos adversos, un promedio de 443 eventos por año (alrededor de 1,19 eventos por día) y se vivieron tres eventos de El Niño y tres de La Niña<sup>142</sup>. Los fenómenos de El Niño (2006 y 2007) y La Niña (2007 y 2008) tienen cada vez más impacto sobre el país, debido al incremento en la vulnerabilidad de la población, tanto por su situación socioeconómica como por la degradación del medio ambiente. En la última década, los desastres han generado pérdidas por un valor de entre 400 y 500 millones de dólares anuales (PNUD, 2011)<sup>143</sup>. Sobre la base de la Ley 602 de Gestión de Riesgos, de 2014, el Plan Nacional de Emergencia ante el Fenómeno El Niño 2015-2016 profundiza las normas de Gestión de Riesgos de Desastres (GdRD) y la adaptación al cambio climático, en la preinversión a partir de 2016 para que exista mayor resiliencia estructural y funcional en los planes de contingencia, con continuidad en

<sup>136</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>137</sup> Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2014). *Inventario de glaciares, cuerpos de agua y bofedales de las cordilleras de Apolobamba y Tres Cruces, Bolivia*. Proyecto de adaptación al impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales – PRAA.

<sup>138</sup> Estado Plurinacional de Bolivia (2015). *Contribución Prevista Determinada Nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia*.

<sup>139</sup> Banco Mundial (2015). Reporte No. 100985-BO.

<sup>140</sup> Estado Plurinacional de Bolivia (2015). *Contribución Prevista Determinada Nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia*.

<sup>141</sup> Ídem.

<sup>142</sup> UDAPE y UNFPA (2015). *Vulnerabilidad Poblacional al Riesgo de Desastres en Bolivia*.

<sup>143</sup> PNUD (2013). *Avances en el conocimiento. El impacto del cambio climático en la biodiversidad*.



los servicios estratégicos a la población<sup>144</sup>. En el marco de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, de 2012, el Gobierno creó el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos<sup>145</sup>.

Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas destaca la importancia de que las mujeres participen plenamente y en condiciones de igualdad en la adopción de decisiones y que las cuestiones de género se incorporen en la elaboración y aplicación de estrategias de reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación respecto de los desastres<sup>146</sup>.

### 2.4.2 Pérdida de biodiversidad

Bolivia cuenta con una superficie de bosques que alcanzaba a 52,5 millones de hectáreas al año 2015. Las áreas protegidas en Bolivia abarcan un 22,5% de territorio nacional, correspondiendo las de carácter nacional a más de 17 millones de hectáreas<sup>147</sup>. De acuerdo con la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), en los últimos 10 años la tasa de deforestación anual asciende a 260.000 hectáreas, principalmente por la explotación de madera, el cambio de uso del suelo para usos agropecuarios realizados con prácticas tradicionales como la quema, que impactan directamente sobre la biodiversidad y se consideran fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sistemas boscosos: en el bosque amazónico, donde la aptitud del suelo no es agrícola ni ganadera, en el bosque de neblina, el bosque en transición, el bosque seco chiquitano, el bosque subandino y el Chaco<sup>148</sup>.

Bolivia es reconocida por su riqueza natural y es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. Riqueza que se encuentra protegida a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, integrado por 123 áreas<sup>149</sup>. Se busca conservar esta biodiversidad a través del manejo sostenible de bosques. Se evidencia un importante avance en el plano normativo, empezando por la CPE. Bolivia es uno de los 17 países mega diversos del mundo, según datos del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC, 2010). Su biodiversidad, tanto de especies silvestres como de especies cultivables y domesticables, constituye una de las más grandes riquezas del país, y por su gran variedad de productos y servicios —muchas veces no reconocidos— tiene importancia a escala regional e internacional<sup>150</sup>. Hay indicadores de que los cambios previstos en la biodiversidad serán causados en su gran mayoría por la deforestación, pero en la zona andina la influencia del cambio climático sobre la pérdida de la biodiversidad será prácticamente del 100%.

Dada la amplia riqueza natural en Bolivia, la biodiversidad del país se ve amenazada por el tráfico y la trata ilegal de especies de flora y fauna para los mercados ilícitos nacionales e internacionales, entre ellos la tala ilegal. Bolivia es vulnerable a los delitos contra la vida silvestre, los cuales se han convertido en la cuarta forma de tráfico ilegal más importantes del mundo, detrás del tráfico de armas, drogas y personas. Además, existen otros impactos negativos de las acciones humanas sobre

<sup>144</sup> UDAPE y UNFPA (2015). *Vulnerabilidad Poblacional al Riesgo de Desastres en Bolivia*.

<sup>145</sup> UDAPE (2015). *Diagnósticos Sectoriales: Agropecuario*.

<sup>146</sup> Naciones Unidas (2014). Resolución A/RES/69/243, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2014.

<sup>147</sup> Ídem

<sup>148</sup> UDAPE (2015). *Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia*.

<sup>149</sup> Ver el *Informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia*, 2014.

<sup>150</sup> PNUD (2013). *Avances en el conocimiento. El impacto del cambio climático en la biodiversidad*.





la biodiversidad, como las obras de infraestructura, la minería, la sobreexplotación de los recursos naturales, la fragmentación de los hábitats y otros<sup>151</sup>.

Los procesos de desertificación afectan al 41% del territorio nacional (439.432,4 km<sup>2</sup>), principalmente a las subregiones del Altiplano, Valles y Chaco, donde vive el 77% de la población nacional (6,4 millones de habitantes); de este porcentaje, el 89% vive en condiciones de extrema pobreza<sup>152</sup>. El 60 % de los suelos están afectados por distintos grados de erosión, existen casi 18 millones de hectáreas potenciales para la agricultura en el país, de las cuales alrededor de 7 millones ya tuvieron actividad humana; de esa cantidad, 3.5 millones conforman la frontera agrícola y de ésta 2.1 millones de hectáreas están en riesgo de degradación<sup>153</sup>.

El aumento de temperatura y el nuevo régimen hídrico que conlleva la escasez de agua profundizan los procesos de desertificación en Bolivia, que afectan seriamente las condiciones de vida y las actividades agropecuarias de la población local y la biodiversidad. En relación a los recursos hídricos, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha impulsado la creación del Decreto Supremo N° 2472 a través del cual se implementarán sistemas de cosecha de agua a nivel nacional<sup>154</sup>.

#### **2.4.3 Asentamientos humanos**

La proliferación de asentamientos humanos periurbanos genera problemas de salud relacionados con condiciones ambientales adversas, incluida la falta de abastecimiento de agua pura y saneamiento, la eliminación inadecuada de desechos, el drenaje deficiente, la contaminación del aire y, en general, esta población está más expuesta a contaminantes procedentes, por ejemplo, de la industria y la eliminación inadecuada de desechos sólidos y líquidos.

Los riesgos ambientales en el hogar y en el lugar de trabajo pueden tener un efecto desproporcionado sobre la salud de las mujeres, las niñas y los niños en razón de su diferente susceptibilidad a los efectos tóxicos de diversas sustancias químicas, de su diferente exposición a ellos y del carácter de las tareas que frecuentemente realizan las mujeres.

Muchos contaminantes ambientales, como los contaminantes orgánicos persistentes (COP), se introducen en la cadena alimentaria y en definitiva en los seres humanos, con lo cual ponen en peligro la salud de las generaciones actuales y futuras. La exposición a metales pesados, en particular el plomo, mercurio y agroquímicos, puede tener efectos nocivos en la salud y el desarrollo del ser humano y en el medio ambiente.

#### **2.4.4 Gestión de residuos sólidos, domésticos e industriales**

Con relación a la disposición final de residuos sólidos a nivel nacional, el 9,2% se efectúa en rellenos sanitarios o botaderos que toman previsión de control ambiental, el resto de residuos sólidos son dispuestos en botaderos a cielo abierto<sup>155</sup>. Por otro lado, en lo que se refiere a estudios de caracterización, se calcula que sólo el 34% de los municipios analizados cuenta con dichos estudios. Si bien existe la Norma Boliviana NB 743, de determinación de parámetros de diseño sobre residuos

<sup>151</sup> Ídem.

<sup>152</sup> Ídem.

<sup>153</sup> Datos del Viceministerio de Tierras.

<sup>154</sup> FAO (2016). *Informe Anual 2015*.

<sup>155</sup> Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2011). *Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en Bolivia*.



sólidos municipales, los resultados de caracterización difieren de un municipio a otro, aún con características similares<sup>156</sup>. El sector industrial, eléctrico y minero generan residuos industriales (contaminantes orgánicos persistentes-COP, basura urbana, etc.), los cuales representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente mundial, debido a sus propiedades tóxicas, resistencia a la degradación y la facilidad que tiene de transportarse por el aire, agua y especies migratorias, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. Bolivia ratificó los convenios internacionales de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, en 1996, 2003 y 2002, respectivamente, los cuales controlan el transporte, reglamentación, uso y eliminación de COP.

Hoy se cuenta con el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero, el cual tiene como objetivo reducir la generación de contaminantes y uso de sustancias peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales y energía para proteger y conservar el medio ambiente, todo con la finalidad última de promover el desarrollo sostenible. Pero este reglamento presenta muchas debilidades, como la falta de mecanismos de motivación y cumplimiento, de manera que no todas las industrias lo cumplen, pues implica un impacto muy fuerte para sus actividades y economía. Actualmente el reglamento está siendo revisado para fortalecerlo y que sea de aplicación para todas las industrias.

El uso de metales pesados (mercurio, plomo, cromo, entre otros) en la industria puede ocasionar bioacumulación, contaminando el medio ambiente y la salud debido a que no se degradan y más bien se acumulan, principalmente en lugares de gran concentración de plantas y animales, así como también en cuerpos de agua y suelos. Una mala gestión de residuos químicos puede provocar daño a la salud y al medio ambiente. Los residuos químicos presentan diferentes categorías de peligrosidad: explosivos, tóxicos, nocivos, corrosivos y cancerígenos. Por todo ello, Bolivia adoptó, el 6 de febrero de 2006, el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés) el cual tiene como objetivo minimizar el impacto adverso de estos productos en la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, se promulgó la Ley 755, el 28 de octubre de 2015, de Gestión Integral de Residuos, que establece la política general y el régimen jurídico de la gestión integral de residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura.

#### 2.4.5 Matriz energética a futuro

Con respecto a la energía eléctrica, en la gestión 2014, se logró una cobertura de 96,7% en el área urbana y 64,4% en el área rural. Sin embargo, se estima que una población dispersa de 200.000 familias no podrá utilizar energías convencionales, por lo que será necesario el desarrollo de fuentes de energía alternativa<sup>157</sup>. La matriz de energía eléctrica en Bolivia está constituida en un 68,6% por generación térmica (gas natural y diésel), el 30,1% por generación hidroeléctrica y el 1,3% por generación con energías alternativas (biomasa)<sup>158</sup>. Bolivia tiene mayor capacidad de generación eléctrica en termoeléctrica a gas natural, un 63%; sus hidroeléctricas producen un 19%; y otras fuentes, el resto. La energía solar por paneles solares se aprovecha en la ciudad de Cobija, Pando, y sustituye al diésel como fuente de energía, con un ahorro de 1,8 millones de dólares al año. Se produce energía eólica en una planta ubicada en el municipio de Pocona, en Cochabamba, con una capacidad de 3 megavatios, que serán inyectados al Sistema Integrado Nacional. Son iniciativas

<sup>156</sup> Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el *Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia*, de 2010, citado en *Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien en el Siglo XXI. Informe País de Bolivia para Hábitat III*, de junio de 2016.

<sup>157</sup> Datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2015

<sup>158</sup> Datos del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA), 2014.



incipientes en energías alternativas. Sin embargo, para el logro de las metas del PDES se debe intensificar estas experiencias hasta producir 411 megavatios en 2020.

El Estado tiene un rol protagónico para garantizar la diversificación económica productiva a partir de la exportación de excedentes de electricidad, promover la protección para hacer frente a la volatilidad de precios, reducir las pérdidas de transmisión y mejorar la comercialización de los recursos energéticos nacionales con criterios de beneficio integral. De acuerdo con el Plan Estratégico de Ahorro y Eficiencia Energética, el objetivo es generar recursos permanentes en las empresas de energía, éstas deberían destinar parte de sus utilidades a la implementación de medidas de eficiencia energética en los consumidores, con base en metas de ahorro de energía predeterminadas por las mismas empresas.

En el marco de este Plan se han implementado políticas a fin de lograr un impacto en la producción, consumo y uso racional y eficiente de la energía y, al mismo tiempo, estimular el desarrollo económico y apoyar al medio ambiente con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se ejecutaron acciones de distribución de focos ahorradores y campañas de concientización de uso de energía eléctrica eficiente, fuera de horas pico.



## 2.5 Alianzas

La esfera Alianzas se basa en la meta planteada en la Agenda 2030 de “movilizar los medios necesarios para implementar esta agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas”<sup>159</sup>.

Esta esfera engloba la conjunción del siguiente ODS y pilar de la Agenda Patriótica 2025:



**ODS 17:** Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



**Pilar 10:** Integración complementaria de los pueblos con soberanía.

### 2.5.1 Alianzas múltiples para lograr resultados para los más vulnerables

Si bien el Estado boliviano es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social, la Agenda 2030 requiere de una Alianza Mundial revitalizada que trabaje con un espíritu de solidaridad, que aglutine “a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el Sistema de Naciones Unidas y otras instancias, movilizando todos los recursos disponibles”<sup>160</sup>, en torno a la movilización de recursos financieros, la transferencia de tecnologías, la creación de capacidades, el comercio y otras cuestiones sistémicas, que permitan el alcance de los objetivos y metas de desarrollo sostenible y del Vivir Bien.

El ODS 17 está directamente vinculado con las políticas y medidas indicadas en el documento final de la tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, realizada en Addis Abeba, en 2015. Uno de los elementos centrales de la Agenda Patriótica 2025 y la Agenda 2030 es la capacidad del Estado para movilizar recursos internos y externos, lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, promover las inversiones y recaudar ingresos fiscales y de otra índole. El PDES representa una oportunidad propicia para la mejora de las capacidades del Estado, no solo desde el punto de vista de la ejecución de inversiones, sino también del diseño y la implementación de políticas públicas multidimensionales, que atiendan las aspiraciones, demandas y necesidades de las bolivianas y los bolivianos de una manera integral. Las mejoras en la coordinación interinstitucional, la complementariedad de las intervenciones y la articulación de planes y programas son un reto que desafía la actual estructura de funcionamiento estatal en la provisión de bienes y servicios, por lo que su fortalecimiento es un tema fundamental en materia de readecuación del aparato público.

<sup>159</sup> Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.

<sup>160</sup> Ídem.



### *2.5.2 Cooperación internacional para la implementación de la Agenda Patriótica y el PDES*

El Sistema de las Naciones Unidas, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, viene trabajando en el análisis y la articulación de los ODS, las metas, los pilares y los resultados de la Agenda Patriótica y la Agenda 2030, que se refleja en el documento “ODS para Vivir Bien”. Algunos de los principales desafíos identificados en el proceso son: mantener la integralidad de la agenda de desarrollo del Estado Plurinacional, la armonización, alineamiento y articulación de los planes nacionales, departamentales y municipales, así como los mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bólvarez”, promulgada en 2010, el pacto fiscal y las consultas sobre las cartas orgánicas municipales constituyen elementos centrales para alcanzar la coherencia normativa e institucional de las políticas públicas.

El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS) es un espacio de coordinación conformado por organismos bilaterales, intergubernamentales y multilaterales. Tiene como objetivo primordial incorporar instrumentos que ayuden a la armonización y alineamiento de la cooperación al desarrollo con las prioridades nacionales, a partir de la implementación estratégica de los acuerdos emergentes de la Agenda 2030, la Declaración de París, el Plan de Acción de Accra y la Alianza de Busán. De esta manera y en coordinación con la intención del Gobierno de consolidar el Vivir Bien, la Agenda Patriótica 2025 y el PDES, el GruS busca generar una estrategia común, eficaz y coordinada para apoyar el desarrollo en Bolivia. El Grupo está conformado por 23 cooperantes, miembros que, desde su establecimiento en 2006, han ido fortaleciendo progresivamente su coordinación con el Gobierno de Bolivia. En este sentido, el GruS se ha convertido en una contraparte importante del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y, en especial, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

### *2.5.3 Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular*

El escenario de la cooperación internacional en Bolivia ha cambiado en el último lustro. Bolivia ha pasado a ser un país de renta media baja, lo que abre un abanico de posibilidades para acceder a nuevos créditos de desarrollo. Sin embargo, esto implica también que los flujos de cooperación tradicional han disminuido, además, es importante considerar la crisis financiera internacional que ha afectado a los principales donantes del país. Asimismo, hay que destacar que nuevas formas de cooperación, como las Sur-Sur y la triangular, se han incrementado significativamente en Bolivia. Esto ha incluido a nuevos actores con capacidad de incidencia en el apoyo al desarrollo del país. El Estado Plurinacional de Bolivia ha participado y fortalecido mecanismos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). A su vez, ha estado vinculado con instituciones y organizaciones de países en desarrollo, como el Grupo de G77+China, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y otros.

### *2.5.4 Alianzas estratégicas con la sociedad civil y el sector privado*

El sector privado contribuye en el desarrollo económico y social del país, tanto desde la producción de bienes y servicios que consumen los hogares para satisfacer sus necesidades como desde la



generación de empleo e ingresos para las familias y los gobiernos a través de salarios decentes e impuestos, respectivamente. La superación de la pobreza está estrechamente relacionada con la posibilidad de contar con un sector privado capaz de absorber la oferta de fuerza laboral en condiciones favorables para el desarrollo.

El aporte del sector empresarial puede contribuir al desarrollo con la generación de innovaciones, tecnologías, recursos, la aplicación de la responsabilidad social empresarial y otros activos que requieren ser muy bien aprovechados y direccionados en los objetivos de largo plazo planteados en el PDES. En esta perspectiva, la inversión privada interna y externa deben ser complementarias a la inversión pública y encontrar en el país un escenario propicio de crecimiento en el marco de la política nacional, el paradigma del Vivir Bien y la Agenda 2030.

La academia, por su parte, genera investigación y conocimientos que son claves para la implementación de las políticas. La investigación es fundamental al momento de encontrar técnicas y tecnologías adaptadas a la realidad social, cultural y ambiental de la población. Es muy importante que, en los próximos años, la academia participe de manera más proactiva en la generación de evidencia para el diseño y evaluación de las políticas públicas cada vez más eficientes y eficaces en lograr un desarrollo sostenible.

Finalmente, la sociedad civil organizada se constituye en pieza fundamental para el monitoreo y el seguimiento a la implementación de cualquier Agenda; además, es una aliada estratégica para llegar a quienes históricamente han estado más rezagados (mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, entre otros).

Estas alianzas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Se ve necesario poner en funcionamiento los sistemas de innovación a través de la coordinación y colaboración entre el Estado, la academia y las empresas productivas privadas y públicas, pequeñas y grandes.



### 3. Ventajas comparativas del Sistema de Naciones Unidas en el país

El análisis de las ventajas comparativas resulta un elemento esencial para evaluar el tipo de cooperación, bajo un enfoque de complementariedad, que puede otorgar el Sistema de Naciones Unidas (SNU) al país en el periodo 2018–2022 para acompañar la implementación de la Agenda Patriótica y el PDES.

El presente análisis es resultado de la identificación de las fortalezas individuales y colectivas de las Agencias, Programas y Fondos del SNU, proceso que ha incluido: a) taller para la identificación de áreas críticas para el CCA, b) consulta interna, c) análisis externo de las ventajas comparativas identificadas por el Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS), a través de una encuesta y d) encuesta en línea a la sociedad civil<sup>161</sup>.

En base a toda la información recogida se llevó a cabo un proceso de reflexión con el Equipo de País (UNCT, por sus siglas en inglés), el grupo de las y los representantes de las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Bolivia, que identificó las ventajas comparativas del SNU en el país.

En una primera instancia y a través de un ejercicio de priorización estratégica, se identificaron las cuatro áreas en las que el SNU debería enfocar su trabajo en el mencionado periodo y, posteriormente, las ventajas comparativas correspondientes a cada área:

<b>Área 1. Desarrollo social inclusivo hacia un ser humano integral</b>	
<b>Áreas identificadas</b> a. Universalización de servicios básicos. b. Sistema educativo integral. c. Salud universal. d. Deporte. e. Seguridad y soberanía alimentaria. f. Protección social.	<b>Estrategias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo en la formulación de políticas públicas, con especial énfasis en la protección social universal.</li><li>• Apoyo en el diseño de normas y protocolos en salud y nutrición.</li><li>• Fortalecimiento de redes de servicio APS.</li><li>• Salvaguardia del patrimonio cultural.</li></ul>

<b>Área 2. Desarrollo integral y economía plural</b>	
<b>Áreas identificadas</b> a. Empleo digno. b. Promoción de la economía plural.	<b>Estrategias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo en la formulación de estrategias y políticas públicas para la protección de</li></ul>

<sup>161</sup> La información detallada sobre el proceso de consulta se adjunta en el Anexo: “Informe sobre ventajas comparativas”.





<p>c. Seguridad y soberanía alimentaria.</p> <p>d. Innovación y desarrollo de tecnologías.</p> <p>e. Gestión de riesgos de desastres y cambio climático.</p> <p>f. Sistemas de vida.</p> <p>g. Protección de la biodiversidad.</p> <p>h. Gestión de áreas protegidas.</p> <p>i. Bosques.</p> <p>j. Agua (Gestión integral de recursos hídricos).</p> <p>k. Gestión de residuos y saneamiento básico.</p> <p>l. Gestión y manejo de residuos industriales.</p> <p>m. Energía, en todas sus dimensiones.</p>	<p>medios de vida frente a efectos del cambio climático.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Respuesta humanitaria, coordinación y manejo de desastres.</li><li>• Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y la diversificación productiva sostenible e inclusiva.</li><li>• Fortalecimiento de capacidades para la implementación de sistemas agrarios y alimentarios incluyentes y sostenibles.</li></ul>
--	--

### Área 3. Democracia intercultural y participativa

Áreas identificadas	Estrategias
<p>a. Reforma de la justicia: sistema de justicia transparente y de calidad que garantiza justicia igualitaria para todas y todos.</p> <p>b. Seguridad ciudadana para una vida sin violencia.</p> <p>c. Participación ciudadana.</p> <p>d. Autonomías y gobiernos AIOCS.</p> <p>e. Metropolización y mancomunidades.</p> <p>f. Gobierno electrónico.</p> <p>g. Gestión institucional.</p> <p>h. Planificación integral y presupuestos.</p> <p>i. Cooperación Sur-Sur.</p> <p>j. Programas de protección social.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promoción y monitoreo del cumplimiento de compromisos internacionales.</li><li>• Fortalecimiento de capacidades estatales y de la sociedad civil.</li><li>• Facilitación de procesos de diálogo para la cooperación intergubernamental.</li><li>• Fortalecimiento de capacidades en el Sistema de Justicia para promover la imparcialidad, neutralidad, despatriarcalización, conocimiento país y sistema, formación de actores, acceso transparente, lucha contra la corrupción e impunidad, violencia contra las mujeres, monitoreo y publicación de información.</li><li>• Promoción de la cooperación Sur - Sur.</li><li>• Fortalecimiento de los gobiernos subnacionales a través del apoyo en los procesos de planificación y la asistencia técnica.</li></ul>



Área 4. Interculturalidad y despatriarcalización	
<b>Áreas identificadas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Fortalecimiento de la democracia comunitaria</li><li>b. Sistema jurídico jurisdiccional propia</li><li>c. Identidad y cultura</li><li>d. Igualdad</li><li>e. Lucha contra el racismo y todas formas de discriminación</li><li>f. Uso, promoción y desarrollo de saberes, prácticas tradicionales, ciencias y conocimientos ancestrales</li><li>g. Despatriarcalización y género</li><li>h. Igualdad</li><li>i. Democracia paritaria</li><li>j. Economía del cuidado</li></ul>	<b>Estrategias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promoción y monitoreo del cumplimiento de compromisos internacionales.</li><li>• Fortalecimiento de capacidades estatales y de la sociedad civil.</li><li>• Asistencia técnica.</li></ul>

Por otro lado, el UNCT también identificó los siguientes ejes transversales que forman parte de las ventajas comparativas mencionadas: 1) Fortalecimiento de capacidades para promover la transparencia, independencia, neutralidad y objetividad en la gestión pública, 2) Apoyo en la gestión de conocimientos, 4) Apoyo en la elaboración de marcos legales e interinstitucionales para la educación intercultural, para la paz y derechos humanos, el desarrollo sostenible y la igualdad de género, 5) Promoción del intercambio de experiencias a nivel internacional.

En base a las ventajas identificadas, la formulación del UNDAF tendrá como base un trabajo conjunto y coordinado entre todas las agencias, de tal modo que su apoyo mediante asistencia técnica, asesoramiento en políticas públicas, gestión de programas e investigación en áreas como educación, salud, pobreza, desarrollo sustentable y justicia, sean de impacto visible sin duplicación de esfuerzos y aprovechando la apertura con las diferentes instancias y niveles del aparato gubernamental, sin dejar de lado el relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, un análisis global de las capacidades que tiene el SNU para actuar en el país, en base a toda la información antes presentada, permite afirmar que ocupa un lugar privilegiado gracias al trabajo coordinado y consensuado que se ha venido realizando con el Gobierno, aspecto que lo convierte en una organización confiable como contraparte. Además, cuenta con capacidad para movilizar experiencia, dadas las alianzas institucionales que tiene a nivel global, regional y dentro del país. Muchas de las Agencias, Fondos y Programas se han convertido en líderes de discusión en diferentes temáticas que forman parte del interés primordial del país.